



Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

Los modos de compensación de las más graves
violaciones de los derechos humanos: los derechos
de las víctimas

Ways of compensating for the most serious human
rights violations: the rights of the victims

Autor

Guillermo Juan Gómez

Directora

Yolanda Gamarra Chopo

Facultad de Derecho
Año 2020

RESUMEN

La reciente evolución del derecho penal internacional refleja el compromiso de la comunidad internacional para fortalecer los instrumentos de lucha contra la impunidad de graves violaciones de derechos humanos y satisfacer los derechos de los agraviados. Este desarrollo se ha traducido en un nuevo modelo de represión y sanción de los crímenes de trascendencia internacional que prioriza las necesidades de las víctimas y amplía sus posibilidades de actuación, a través de mecanismos de diversa naturaleza, tanto jurisdiccionales como extrajudiciales. La vía extrajudicial se canaliza a través de las comisiones de la verdad y otros órganos de investigación, que constituyen los máximos exponentes de la dimensión restaurativa de la justicia, alternativa al enfoque tradicional. La acción judicial, por otra parte, puede emprenderse a nivel estatal, que en un principio era el único medio de tutela de los intereses de las víctimas, lo que potenció el desarrollo de la jurisdicción universal para garantizar su acceso a la justicia; pero también a través de tribunales internacionales, fruto de un proceso de cooperación transnacional que culminó en la creación de la Corte Penal Internacional.

ABSTRACT

Recent developments in international criminal law reflect the commitment of the international community to strengthen instruments to combat impunity for gross human rights violations and to fulfil the rights of the offended. This trend has resulted in a new model of repression and punishment of crimes of international concern, prioritizing the needs of victims and broadening their possibilities for action through mechanisms of various kinds, both jurisdictional and extrajudicial. The extrajudicial path is channelled through truth commissions and other investigative bodies, which are the main exponents of the restorative dimension of justice, an alternative to the traditional approach. Judicial action, on the other hand, can be taken at the State level, which was originally the only means of protecting the interests of victims, helping enhance the development of universal jurisdiction to ensure their access to justice; but also through international tribunals, the result of a process of transnational cooperation culminating in the creation of the International Criminal Court.

Índice

1. Introducción	4
2. La justicia transicional: los derechos de las víctimas	5
3. Los mecanismos no jurisdiccionales de compensación: las comisiones de la verdad	10
3.1. Características y funcionamiento: baluarte de la justicia restaurativa	13
3.2. Los objetivos de una comisión de la verdad y el papel protagonista de las víctimas	18
3.3. Interacción con la dimensión retributiva de la justicia.....	22
4. Los mecanismos jurisdiccionales internos de compensación de las víctimas	25
4.1. Alcance de la jurisdicción de los tribunales internos mediante la aplicación de la legislación nacional.....	26
4.2. La problemática de la justicia universal	30
4.2.1. Características y límites del principio de jurisdicción universal	30
4.2.2. Auge y caída de la jurisdicción universal en España.....	38
4.3. La justicia universal como una posible vía para las víctimas del franquismo.....	43
5. Los mecanismos jurisdiccionales de compensación de las víctimas en el plano internacional	45
5.1. Los tribunales internacionales <i>ad hoc</i>	46
5.2. Los tribunales mixtos e híbridos: especial mención al caso de Kosovo	49
5.3. El papel de la Corte Penal Internacional en el amparo de los derechos de las víctimas.....	52
6. Conclusiones	58

Listado de abreviaturas

ACNUDH: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

AGNU: Asamblea General de las Naciones Unidas

AN: Audiencia Nacional

CDI: Comisión de Derecho Internacional

CEH: Comisión para el Esclarecimiento Histórico (Guatemala, 1994)

CIJ: Corte Internacional de Justicia

CIJT: Centro Internacional para la Justicia Transicional

CNVR: Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Chile, 1990)

CONADEP: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Argentina, 1983)

Corte IDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos

CPI: Corte Penal Internacional

DUDH: Declaración Universal de los Derechos Humanos

FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia

LO: Ley Orgánica

LOPJ: Ley Orgánica del Poder Judicial

MINUK: Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo

ONG: Organización No Gubernamental

ONU: Organización de las Naciones Unidas

PIDCP: Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos

REMHI: Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica

TC: Tribunal Constitucional

TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos

TPIR: Tribunal Penal Internacional para Ruanda

TPIY: Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia

TS: Tribunal Supremo

1. Introducción

El objeto de este trabajo fin de grado (TFG) es llevar a cabo un análisis de las diferentes formas de investigar las más graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos producidas en un conflicto bélico o durante un régimen autoritario represivo, así como de las circunstancias en las que suceden y las causas que las desencadenan. Está planteado desde la perspectiva de las víctimas, por lo que hace hincapié en sus derechos y en la protección que el derecho internacional les concede ante estas situaciones.

A lo largo del TFG abordo la cuestión desde una perspectiva global, realizando una aproximación simplificada a través de un recorrido general, sin ánimo de exhaustividad, por los distintos medios previstos legalmente para compensar a las víctimas por los abusos sufridos, así como las posibilidades de actuación que se ponen a su disposición.

Para ello señalaré las principales características, el modo de funcionamiento y las posibilidades que ofrece cada uno de estos métodos, tanto jurisdiccionales como extrajudiciales, así como el efecto de su intervención en las víctimas de las atrocidades, ilustrando cada uno de ellos con ejemplos de mecanismos puestos en práctica en el pasado y en el presente en distintas partes del mundo, tanto por agentes estatales como por organismos internacionales, valorando su potencial y sus perspectivas de futuro.

En la elección de este tema me he guiado por su singularidad, pues no se atiene a la idea tradicional de justicia, por lo que requiere un análisis interdisciplinar, sin ceñirse a los ordenamientos jurídicos nacionales ni a la normativa internacional, que no pueden abarcar su complejidad por sí solos. Sin embargo, se trata de un tema de actualidad, y su desarrollo contribuye a la evolución de la justicia, haciendo partícipes a las víctimas y tratando de dar una respuesta a cuestiones que de otro modo no podrían ser resueltas.

He seguido una metodología inductiva, a través del análisis casuístico y la lectura de ensayos, estudios y resoluciones, tomando notas y relacionando ideas de distintos autores, con el fin de formarme una concepción global de los modos de compensación existentes en el derecho internacional contemporáneo. Este procedimiento me ha permitido elaborar una síntesis de todas ellas para realizar una exposición en conjunto, y finalizar desarrollando las conclusiones a las que he llegado. Con el fin de citar correctamente las fuentes de información a las que he acudido, ya se trate de trabajos académicos, de textos

legales o de jurisprudencia, he adoptado el formato indicado en la guía docente del Trabajo Fin de Grado.

Actualmente, la idea de afrontar un pasado violento desde una perspectiva global está en pleno apogeo: en aras de presentar una solución efectiva desde todos los puntos de vista, cada vez es más frecuente que los distintos mecanismos de compensación convivan en un mismo tiempo y espacio y estrechen su colaboración, conscientes de su complementariedad y de su capacidad de optimizar el funcionamiento de la justicia para con las víctimas.

2. La justicia transicional: los derechos de las víctimas

Toda sociedad que emerge de un conflicto armado o de un régimen represivo, y avanza hacia un régimen democrático de derecho, se encuentra en una situación de transición social y política, en la que el tradicional modelo de la justicia ordinaria no es capaz de acometer las necesidades derivadas de un trágico pasado reciente¹, caracterizado por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. En este contexto surge la noción de justicia transicional como una forma eficaz y legítima de afrontar una etapa que ha provocado la debilidad del poder judicial y ha socavado la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.

La justicia transicional² engloba el conjunto de mecanismos, tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, diseñados para responder a las exigencias de justicia en una situación tan delicada y excepcional como es la radical transformación de un Estado y la sociedad que lo compone, en un intento de recomponerse de un período oscuro para los derechos humanos³. El objetivo de la justicia transicional es, precisamente, lograr la superación definitiva de ese período violento, facilitando la fluidez de ese proceso de transición, ya sea de un régimen autoritario a una democracia o de una guerra a una situación de paz, para dar paso al imperio de la ley, la protección de los derechos humanos

¹ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., en *Justicia Transicional y Comisiones de la Verdad*, 2ª ed., Berg Institute, Madrid, 2017, pp. 39-41

² En palabras del Secretario General de Naciones Unidas, la justicia transicional «abarca toda la variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación». *Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad sobre el estado de derecho y la justicia en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos* (S/2004/616), 3 de agosto de 2004, p. 6.

³ Definición extraída de IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 65-70, que recoge varias aproximaciones ofrecidas por la doctrina.

y la consolidación del estado democrático de derecho. Su misión es la búsqueda de la paz y la reconciliación, pero sin dejar de lado la garantía de los derechos de las víctimas de la violencia sistemática; se debe dar respuesta a la necesidad social de consolidar una paz sostenible, estable y duradera, pero equilibrándola con las demandas de las víctimas, respaldadas por el derecho internacional humanitario, para impedir la impunidad de los perpetradores⁴.

En definitiva, el principal desafío de la justicia de transición es la conciliación de los valores de paz y justicia, que se encuentran en contraposición natural: mientras que la paz se sustenta en la reconciliación social entre víctimas y victimarios, la exigencia jurídica de respeto a las víctimas y sus derechos hace presión en una dirección diferente o, incluso, contradictoria⁵.

Ya en 1977 se adoptaron los Protocolos Adicionales I y II a las Convenciones de Ginebra de 1949⁶, que contienen normas humanitarias relativas a la protección de las víctimas de conflictos armados internacionales e internos, respectivamente. En 1997, la comunidad internacional reforzó su compromiso con los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos a raíz de la elaboración del llamado «Informe Joinet», que contenía un anexo con una serie de *Principios y directrices sobre la protección y promoción de los derechos humanos en la lucha contra la impunidad*⁷; en este documento, el jurista Louis Joinet define y sistematiza los derechos de las víctimas a la justicia, a la verdad y a la reparación integral como parámetros esenciales de la justicia transicional. En 2005, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (precedente del actual Consejo de Derechos Humanos) aprobó una actualización de estos principios encargada a Diane Orentlicher⁸. También encuentran su fundamento en otros instrumentos internacionales de *soft law*, como los *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de*

⁴ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *ibíd.*, pp. 100-104.

⁵ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *ibíd.*, p. 98.

⁶ *Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales* (Protocolo I); y *Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional* (Protocolo II). Ambos fueron aprobados el 8 de junio de 1977.

⁷ Presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU el Informe final elaborado y revisado por M. Joinet en aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión. Distr. General E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev.1 2 octubre de 1997.

⁸ La Comisión toma nota del Conjunto actualizado de principios como directrices que ayuden a los Estados a desarrollar medidas eficaces para luchar contra la impunidad por medio de su Resolución 2005/81, sobre impunidad. Doc. ONU E/CN.4/RES/2005/81.

*derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*⁹. Estos derechos constituyen, a su vez, correlativas obligaciones internacionales para los Estados, que deben asegurarlos en cumplimiento de un mandato de derecho internacional¹⁰.

En primer lugar, el derecho de las víctimas a la **justicia** se concreta en el derecho de acceder a la administración de justicia e imponer un recurso efectivo, e implica la obligación del Estado de investigar los actos que pueden ser constitutivos de violaciones de derechos humanos y enjuiciar a los responsables, evitando así su impunidad. El incumplimiento de este deber por la jurisdicción nacional, por incapacidad o falta de voluntad, provoca la intervención de tribunales internacionales para hacer efectivo este derecho. Cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos, existen mecanismos de protección del derecho a la justicia, como la imprescriptibilidad de los delitos graves en el derecho internacional o la prohibición internacional de aplicar la amnistía a sus responsables¹¹. No obstante, en un contexto de transición se debe tener en cuenta no solo la tradicional dimensión retributiva de la justicia, consistente en la imposición de una pena al delincuente como respuesta al daño causado; sino que se debe combinar con la llamada visión restaurativa de la justicia, una perspectiva alternativa al sistema penal cuyo propósito es la reparación, en lo posible, de los efectos del daño producido (tanto a la víctima como a la sociedad en su conjunto) y el restablecimiento de las relaciones sociales afectadas por la conculcación de derechos¹². Así, la justicia restaurativa presta mayor atención a la figura de la víctima, que no juega un papel relevante cuando la justicia se aplica desde una perspectiva meramente retributiva.

El derecho a la **verdad**¹³ alude a la reconstrucción de un relato verídico de los hechos constitutivos de violaciones de derechos humanos. Este derecho presenta una dimensión individual, entendida como el derecho de cada víctima a conocer las circunstancias concretas en que ocurrieron los hechos (y su motivación) e identificar a los victimarios, así como a ser oída y aportar su propia versión de los hechos; y una dimensión colectiva, que se materializa en el derecho genérico de la sociedad a conocer su pasado y su deber

⁹ Aprobados por la Asamblea General de la ONU, en su Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005.

¹⁰ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 365 y 371.

¹¹ Principios 24 y 25 del Informe Joinet.

¹² Postura defendida por IBÁÑEZ NAJAR, J. E., en *Justicia Transicional y Comisiones de la Verdad*, 2ª ed., Berg Institute, Madrid, 2017, p. 366.

¹³ Desarrollado en los principios 2 a 5 del Informe Joinet como el «derecho a saber».

de recordarlo, contribuyendo a preservar una memoria histórica que permita la identificación colectiva con unos hechos que se configuran como verdad oficial¹⁴. Aunque no es raro que la dilucidación de la verdad se utilice para sustanciar un posterior enjuiciamiento penal, su conocimiento es un fin en sí mismo, por lo que constituye un derecho autónomo, aunque deba hacerse efectivo en armonía con el resto. Se materializa a través de mecanismos judiciales, que esclarecen la verdad de los hechos de manera indirecta, a través de las investigaciones del proceso; y especialmente por mecanismos extrajudiciales cuyo objeto principal es la búsqueda de la verdad, pero que carecen de funciones jurisdiccionales. En este segundo grupo se encuadran las comisiones de la verdad, así como otras comisiones de investigación¹⁵.

Las víctimas también tienen derecho a obtener una **reparación** justa y adecuada por la vulneración de sus derechos humanos, dirigida a suprimir, moderar o compensar (en la medida de lo posible) los efectos del daño. Existen distintas modalidades de reparación¹⁶, siendo la principal la plena restitución (*resitutio in integrum*), que consiste en el cese inmediato de la violación y el restablecimiento de la situación anterior (por ejemplo, la puesta en libertad de aquellos que han sido detenidos arbitrariamente, o la devolución de bienes arrebatados ilegalmente); no obstante, en muchas ocasiones resulta imposible borrar los efectos del delito, y solo procede ofrecer una indemnización monetaria, a modo de compensación de todos los perjuicios cuantificables económicamente, sean de carácter material o moral¹⁷. Otra de las medidas de reparación previstas es la rehabilitación, que comprende servicios jurídicos y sociales, así como la debida atención médica y psicológica que puedan requerir las víctimas de eventos traumáticos. Por último, también existen medidas de naturaleza simbólica: se trata de la llamada satisfacción, cuyo objetivo es reparar los daños morales y reivindicar la dignidad de las víctimas, que adopta formas como el ofrecimiento de disculpas públicas, la celebración de actos conmemorativos o la búsqueda de personas desaparecidas¹⁸.

¹⁴ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 344-347.

¹⁵ *Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto: comisiones de la verdad*, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Nueva York y Ginebra, 2006, p. 2; también en IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, p. 729

¹⁶ Están explicadas detalladamente en IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 468-496.

¹⁷ GÓMEZ MÉNDEZ, M. P., «Comisiones de verdad: ¿qué tanto aportan a la verdad, la justicia y la reconciliación?», en *OASIS* [revista electrónica], n. 11, Bogotá, 2005 [consultado el 2 de marzo de 2020], p. 62.

¹⁸ HAYNER, P. B. *Verdades innombrables: el reto de las comisiones de la verdad* [libro electrónico], Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2010, pp. 202-204.

Como parte de la satisfacción de las víctimas se erige el derecho a las **garantías de no repetición**, que se han llegado a erigir como derecho autónomo. Son iniciativas de carácter jurídico, político o administrativo que pretenden la prevención de ulteriores violaciones de los derechos humanos en el futuro¹⁹. A título de ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) contempla el fortalecimiento de la independencia del poder judicial, campañas de sensibilización y fomento de los derechos humanos, o cambios estructurales en el funcionamiento del Estado, desde reformas institucionales (por ejemplo, en el poder judicial) hasta cambios legislativos o incluso constitucionales²⁰.

El hecho de que la satisfacción de los derechos de las víctimas sea una piedra angular de la justicia transicional²¹ refleja la importancia que ha ido adquiriendo la figura de la víctima, mostrando una clara evolución de la justicia hacia modelos restaurativos, en los que predomina la protección de sus derechos. Para determinar quién es titular de estos derechos, resulta esclarecedor definir el concepto de víctima como sujeto de derechos; la definición más explicativa la proporciona la AGNU en su Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005: «toda persona o colectivo que haya sufrido daños (...), como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario»²². Existen víctimas directas (aquellas que sufren directamente los efectos del acto) e indirectas (aquellas que tenían una relación de parentesco con la víctima directa o estaban a su cargo). Además de individuos, las víctimas también pueden ser colectivos, ya se trate de grupos de personas que sufren un daño derivado de una misma causa, o comunidades que comparten una misma lengua o cultura²³.

Cada Estado debe confeccionar el modelo de justicia transicional que mejor se adapte a sus necesidades y a su coyuntura (histórica, social y política)²⁴ para lograr de la forma más efectiva la premisa básica de superación definitiva del controvertido pasado mediante la conquista de la reconciliación social y una paz duradera y estable, al mismo tiempo que se promueve la reparación integral de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad, la

¹⁹ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 508-510 y 521-529.

²⁰ En su Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005 (Principio IX).

²¹ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, p. 420.

²² Resolución 60/147 de la AGNU, en su principio 8º (V).

²³ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 458-467.

²⁴ *Ibíd.*, pp. 94-95.

depuración de responsabilidades y la implantación de medidas orientadas a evitar la producción de situaciones de abusos similares.

El éxito en la conciliación de paz y justicia en un contexto de transición sociopolítica requiere una apropiada combinación de diversos mecanismos, ya que las Naciones Unidas defienden una perspectiva holística de la justicia transicional²⁵ para facilitar el tránsito hacia una sociedad democrática y reconciliada, a la vez que se asegura la efectividad de los derechos de las víctimas. Por un lado, los tradicionales mecanismos jurisdiccionales realizan su labor a través de los tribunales de justicia, que se ocupan de investigar violaciones de derechos humanos, determinar responsabilidades y sancionar a los culpables. Operan a nivel estatal, dentro de una jurisdicción nacional; o a nivel internacional, como los tribunales *ad hoc*, los tribunales mixtos o híbridos y los tribunales permanentes como la Corte Penal Internacional u otros organismos a nivel regional (el TEDH, la Corte IDH...). Y por otro lado se encuentran los mecanismos no jurisdiccionales, de origen más reciente pero igual de esenciales para lograr una adecuada transición; en este grupo se engloban las comisiones de la verdad y otros instrumentos de investigación, cuya labor es esclarecer la realidad de los hechos, así como las iniciativas de reformas institucionales o legislativas o la implantación de programas de reparación²⁶.

A continuación procederé a dar una explicación detallada sobre las características de cada uno de estos mecanismos, la función que desempeñan para hacer frente a un pasado de agravio a los derechos humanos, y la efectividad de su actuación.

3. Los mecanismos no jurisdiccionales de compensación: las comisiones de la verdad

Las comisiones de la verdad son el principal mecanismo de justicia transicional de carácter no jurisdiccional o extrajudicial, esto es, que aborda las violaciones de los derechos humanos desde una perspectiva alternativa al tradicional enfoque punitivo de la justicia, centrado en la figura del perpetrador para determinar su responsabilidad e imponerle una sanción adecuada a su actuación. Son órganos independientes de cualquier injerencia política o judicial, instituidos oficialmente para investigar un patrón

²⁵ Es decir, la adopción de una estrategia que tenga en cuenta todos los mecanismos en su conjunto. *Informe del Secretario General sobre el Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos*, 3 de agosto de 2004, p. 12.

²⁶ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 603-606.

sistemático de graves violaciones a los derechos humanos a lo largo de un período de tiempo determinado. Su cometido principal es el esclarecimiento de la verdad y la construcción de un relato científicamente contrastado de los hechos investigados, para así hacer efectivo el derecho de las víctimas (y, en última instancia, de la sociedad en general) a la verdad²⁷. Su intrínseco carácter temporal les concede un plazo limitado para la realización de sus funciones, que suelen incluir la toma de declaraciones, la realización de estudios e investigaciones concretas o la celebración de audiencias públicas, finalizando su labor con la emisión de un informe en el que hace públicas sus conclusiones y proyecta recomendaciones de carácter legislativo, institucional o administrativo²⁸.

Aunque son constituidas por las autoridades estatales, presentan una evidente conexión con el derecho internacional, pues responden a la necesidad de abordar desde una perspectiva restaurativa los crímenes contra los derechos humanos, cuya conculcación afecta a toda la comunidad internacional y que, por tanto, son objeto de prohibición y represión internacional. Estas comisiones suelen constituirse a iniciativa de grupos de defensa de los derechos humanos u organizaciones internacionales que supervisan su actuación, y muchas veces están compuestas por comisionados de diferentes nacionalidades²⁹. Su labor permite a los Estados cumplir las exigencias del derecho internacional con respecto al derecho a la verdad, por lo que desarrollan sus investigaciones dentro del marco legal que les proporcionan las normas internacionales, de forma que todas ellas deberán asegurar la participación de las víctimas y perseguir el objetivo de construir un relato único de los hechos para lograr la reconciliación colectiva.

Desde su irrupción en escena, se han constituido más de 40 comisiones de la verdad en todo el mundo³⁰, siendo África y Sudamérica las regiones que mayor número han albergado. Algunas de ellas han marcado un antes y un después en la forma de abordar

²⁷ Definición extraída de la conjunción de varios documentos, especialmente HAYNER, P. B. *Verdades innombrables: el reto de las comisiones de la verdad* [libro electrónico], Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2010, p. 4; e IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *Justicia Transicional y Comisiones de la Verdad*, 2ª ed., Berg Institute, Madrid, 2017, pp. 354, 691 y 718.

²⁸ HAYNER, P. B., «Truth commissions: a schematic overview», en *International Review of the Red Cross* [revista electrónica], n. 862, 2006 [consultado el 26 de febrero de 2020], p. 2.

²⁹ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 724 y 753; y TAMARIT SUMALLA, J., «Comisiones de la verdad y justicia penal en contextos de transición», en *Indret: Revista para el Análisis del Derecho*, nº 1 [revista electrónica], Barcelona, 2010 [consultado 22 de mayo de 2020], p. 7-11 y 24. Disponible en: <https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/694.pdf>

³⁰ HAYNER, P. B. *Verdades innombrables: el reto de las comisiones de la verdad* [libro electrónico], Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2010, pp. 56 y 288.

un conflicto, mientras que otras han tenido un menor impacto en el proceso de transición o no han recibido la misma atención nacional e internacional.

Una de las pioneras fue la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), constituida en Argentina en 1983 para investigar las desapariciones forzadas y otros agravios a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar, que se mantuvo en el poder desde 1976 hasta 1983 a través de sucesivas Juntas militares. Tras recabar más de 7.000 declaraciones y localizar numerosos campos de detención en todo el país, la CONADEP emitió el Informe *Nunca más*, que demostró la existencia de una represión sistemática y masiva, y allanó el camino para la posterior celebración de los llamados Juicios de las Juntas en 1985³¹.

La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (CNVR) constituida en Chile en 1990 se enfrentó a una coyuntura similar, pues su función era la de esclarecer las violaciones de derechos y el terrorismo de estado durante el régimen de Augusto Pinochet, que ordenó torturas, asesinatos y desapariciones masivas. Su mandato no le permitía abarcar todos los crímenes cometidos por las fuerzas estatales, pero marcó un hito en la transición chilena a la democracia³².

En Sudáfrica, en 1995 se aprobó la ley de creación de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, creada para fomentar la reconciliación nacional a través de la investigación de los abusos cometidos durante el régimen del *apartheid*, y fue la primera dotada de la facultad de conceder una amnistía condicionada a los victimarios³³. Su gran impacto en la sociedad civil y la gran cobertura mediática que acaparó la han posicionado como una de las más significativas³⁴.

También fueron relevantes las comisiones establecidas en Guatemala (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 1994) y El Salvador (1991). Tenían características similares, pues ambas fueron constituidas para investigar las atrocidades cometidas durante sendas guerras civiles entre las fuerzas estatales y grupos guerrilleros, en las que las tropas gubernamentales habían perpetrado auténticas masacres contra población civil.

³¹ *Ibíd.*, pp. 57-58.

³² *Ibíd.*, pp. 58-60.

³³ *Comisionar la justicia: las comisiones de la verdad y la justicia penal*, Amnistía Internacional, Madrid, 2010, p. 12.

³⁴ GÓMEZ MÉNDEZ, M. P., *op. cit.*, p. 68.

En ambos casos, las comisiones se crearon a raíz de un acuerdo de paz supervisado por Naciones Unidas³⁵.

También se han establecido comisiones importantes en Perú, Uganda, Sri Lanka, Chad, Haití, Timor Leste o Sierra Leona. Se trata de un fenómeno en expansión que ha ido ganando popularidad en los últimos años, dado su éxito en experiencias pasadas y la evolución del derecho internacional humanitario³⁶. Una de las comisiones de más reciente creación es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV), constituida en Colombia en 2017³⁷ para dilucidar la verdad sobre los hechos acontecidos durante el conflicto bélico interno entre las fuerzas gubernamentales y la guerrilla de las FARC³⁸.

3.1.Características y funcionamiento: baluarte de la justicia restaurativa

Dado que las comisiones de la verdad son mecanismos creados en el ámbito nacional, cada modelo es único y responde a la coyuntura nacional; por tanto, no existe una regulación general internacional sobre estos entes que determine su legitimidad. No obstante, con carácter general se cumplen una serie de estándares mínimos, que actúan como parámetros esenciales para distinguir a las comisiones de la verdad de aquellos organismos no reconocidos como tales por la comunidad internacional. Las Naciones Unidas y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (CIJT) han previsto estos requisitos³⁹. En este sentido, según los *Principios y directrices sobre la protección y promoción de los derechos humanos en la lucha contra la impunidad* de Joinet, las denominadas «comisiones no judiciales de investigación» deben ser creadas por los Estados como una medida eficiente para hacer efectivo el «derecho de saber», que es su principal función (principios 4 y 5); deben presentar garantías de independencia e imparcialidad (principio 6) y proveerse de un mandato claro a través de una norma estatal que determine sus atribuciones y capacidades, siempre con vocación complementaria y nunca con la intención de reemplazar la función de la jurisdicción (principio 7). También

³⁵ *Ibíd.*, pp. 61 y 67-70.

³⁶ *Ibíd.*, pp. 288-293.

³⁷ Por el Decreto 588 de 2017, tras la promulgación del Acto Legislativo 01 de 2017. IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 695-696.

³⁸ Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) son un grupo insurgente colombiano.

³⁹ Contenidos en los ya mencionados *Principios y directrices* de Louis Joinet, editado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, o también en el documento «A Truth Commission for Kenya Incorporating International Standards and Best Practice», editado por el Centro Internacional para la Justicia Transicional, Nueva York, 2008.

se prevén garantías para los acusados, que tendrán derecho a defenderse y a que la información sea contrastada a través de distintas fuentes (principio 8); y para las víctimas y los testigos, a quienes deberá proporcionarse protección (principio 9). La labor de la comisión concluirá con la publicación de un informe final, que contendrá sus conclusiones y recomendaciones para luchar contra la impunidad (principios 11 y 12).

La instauración de una comisión de la verdad tiene lugar en un contexto de transición social y política, a veces como parte de una estrategia de justicia transicional integral, ya que su complemento con otros instrumentos, como acciones penales o políticas de reforma, asegura una mayor efectividad⁴⁰. Su **acto constitutivo** puede adoptar la forma de decreto ejecutivo (que favorece una rápida implementación) o de ley parlamentaria (acusa mayor lentitud, pero la comisión goza de un amplio respaldo político, y suele tener más facultades porque nace del consenso)⁴¹. Los términos del **mandato** de la comisión, que es el acto habilitante en el cual se determinan sus facultades y las condiciones en que va a desarrollar su labor, así como su objetivo final de búsqueda de la verdad, también pueden provenir de un acuerdo de paz entre el gobierno del Estado y un grupo subversivo, de las negociaciones de transición a la democracia o incluso de una consulta popular, en cuyo caso se dota de mayor solidez y apoyo social⁴².

Aunque en último término la decisión de constituir una comisión de la verdad corresponde a cada Estado, no es extraña la intervención de la comunidad internacional, mediante la cooperación de ONG y grupos de defensa de los derechos humanos; en el caso de Guatemala, las negociaciones de paz contaron con la supervisión de la ONU, y grupos de víctimas ejercieron presión para lograr mejores condiciones en el mandato y así constituir una comisión de la verdad fuerte⁴³. El apoyo internacional también se proporciona en forma de financiación, asesoría o posibilitando el acceso a archivos de Estados extranjeros⁴⁴.

⁴⁰ GONZÁLEZ, E. y VARNEY, H., «¿Qué son las comisiones de la verdad?», en *En busca de la verdad: elementos para la creación de una comisión de la verdad eficaz* [libro electrónico], Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), Nueva York, 2013, p. 13.

⁴¹ En América Latina se generalizó el uso del decreto presidencial por los recién elegidos gobiernos democráticos, como hizo en Argentina el presidente Raúl Alfonsín y en Chile el presidente Patricio Aylwin. HAYNER, P. B., *op. cit.*, p. 252.

⁴² *Ibid.*, p. 102; también en IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 720-724.

⁴³ HAYNER, P. B., *op. cit.*, p. 253.

⁴⁴ El archivo documental de Estados Unidos es una recurrida fuente de información, dada su intervención en la política de varios Estados sudamericanos, como Guatemala o El Salvador. *Ibid.*, p. 278.

En el mandato de cada comisión se precisan sus **atribuciones** concretas, que condicionan su modo de actuación, la **metodología** empleada en la búsqueda de la verdad. La mayoría de comisiones de la verdad utilizan diversas **fuentes** para recopilar información⁴⁵, pero su fuente primordial son los testimonios de las víctimas o sus familiares, los testigos y los perpetradores (por ejemplo, la Comisión sudafricana llegó a reunir 22.000 testimonios⁴⁶). Las comparecencias pueden producirse en audiencia pública, un método de transparencia total que da reconocimiento a las víctimas y muestra la verdad directamente a toda la población (en Sudáfrica, además, las sesiones gozaban de una amplia cobertura mediática⁴⁷); no obstante, muchas veces los comparecientes narran su historia en una reunión privada, con una toma de declaración individual, lo que les aporta una mayor tranquilidad y confianza, y asegura una mejor protección de testigos (éste ha sido el *modus operandi* más común en las comisiones latinoamericanas). También suelen recurrir al análisis documental, o a inspecciones sobre el terreno (como exhumaciones), con el fin de contrastar las informaciones recibidas a través de distintas fuentes y asegurar su certeza en el mayor grado posible. El mandato puede fortalecer a la comisión concediéndole el poder de citación, que obliga a comparecer a los llamados a declarar, facilitándole el acceso a documentos guardados en archivos u otorgándole facultades de registro; en caso contrario, dependen de la colaboración voluntaria⁴⁸.

El mandato también delimita el **objeto** material de investigación y el marco espacio-temporal que entra dentro de la competencia de la comisión, definiendo el ámbito concreto de la verdad que se pretende documentar. En función de la flexibilidad de sus disposiciones distinguimos entre un mandato amplio (si deja cierto margen de discrecionalidad a la comisión, estableciendo meras directrices generales para el desempeño de su labor, lo que posibilita una investigación más exhaustiva) o restringido (si contiene limitaciones explícitas y precisas sobre la materia a la que debe circunscribirse la comisión, favoreciendo una mayor especialización pero arriesgándose a proporcionar una versión parcial de la verdad)⁴⁹. Por ejemplo, la CNVR chilena solo podía investigar desapariciones, ejecuciones y atentados, dejando fuera actos de tortura

⁴⁵ Sobre las distintas fuentes empleadas, IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 754-759.

⁴⁶ GONZÁLEZ, E. y VARNEY, H., *op. cit.*, p. 15.

⁴⁷ Se retransmitían en directo a través del programa de televisión *Truth Commission Special Report*, líder en audiencia. HAYNER, P. B. *op. cit.*, p. 263.

⁴⁸ *Instrumentos del Estado para sociedades que han salido de un conflicto: comisiones de la verdad*, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Nueva York y Ginebra, 2006, pp. 10-11 y 13; y HAYNER, P. B. *op. cit.*, p. 262-270.

⁴⁹ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 724-729.

que no hubieran provocado la muerte; asimismo, la CONADEP argentina investigaba únicamente desapariciones forzadas. Sin embargo, la Comisión salvadoreña tenía un objeto más amplio, dirigido a cualquier tipo de violencia que conllevara graves abusos de los derechos humanos⁵⁰.

En el acto constitutivo también debe fijarse el **término** de la comisión, el plazo que se le otorga para que desarrolle su cometido; con carácter general, su duración se extiende entre los seis meses y los dos años, permitiéndose breves prórrogas, pero deben tenerse en cuenta las circunstancias concretas de cada caso, a fin de que sea un tiempo suficiente para que la comisión cumpla su mandato satisfactoriamente⁵¹, teniendo en cuenta que es necesaria una etapa preparatoria para el alquiler de infraestructuras, la contratación del personal, reunir fondos... El período de funcionamiento de la comisión no debe prolongarse demasiado, pues perdería el impulso político inicial y el interés de la población⁵², como sucedió con la Comisión ugandesa constituida en 1986, a la que no se le impuso límite de tiempo y tardó nueve años en presentar su informe final⁵³.

Las comisiones de la verdad tienen un número variable de miembros, que debe ser suficiente para asegurar la objetividad de su investigación⁵⁴. Los comisionados deben ser personas independientes formadas en derechos humanos, expertos jurídicos y técnicos que conformen un grupo capaz de abordar un análisis multidisciplinar sobre los hechos. Pueden ser nacionales o extranjeros (últimamente se apuesta más por los modelos mixtos, tras la experiencia de El Salvador⁵⁵), pero en todo caso deben presentar amplias garantías de imparcialidad, siendo representativos de la sociedad civil, de los agentes estatales y de la comunidad internacional⁵⁶. La **composición** se suele determinar a través de un proceso de selección, como ocurrió en la Comisión de Sudáfrica en 1995⁵⁷. Es conveniente que la plantilla de empleados incluya trabajadores sociales y psicólogos para prestar asistencia

⁵⁰ HAYNER, P. B. *op. cit.*, pp. 102 y 103.

⁵¹ *Ibíd.*, pp. 258-260.

⁵² *Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto: comisiones de la verdad*, Naciones Unidas (ACNUDH), Nueva York y Ginebra, 2006, p. 17.

⁵³ HAYNER, P. B. *op. cit.*, p. 83.

⁵⁴ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 746-749.

⁵⁵ La Comisión salvadoreña de 1992 estuvo compuesta íntegramente por comisionados extranjeros, sacrificándose el conocimiento de expertos nacionales sobre la realidad del país a cambio de potenciar la imagen de independencia del organismo. HAYNER, P. B. *ibíd.*, p. 257.

⁵⁶ HAYNER, P. B. *ibíd.*, p. 254-258; GONZÁLEZ, E. y VARNEY, H., *op. cit.*, pp. 13-14.

⁵⁷ Los 17 miembros finales fueron seleccionados por el presidente Nelson Mandela a partir de las candidaturas presentadas ante un comité de selección nombrado al efecto, que previamente realizó una criba entre los candidatos. HAYNER, P. B. *ibíd.*, p. 255.

a víctimas y otros comparecientes, así como intérpretes, agentes de seguridad e informáticos para el manejo de bases de datos⁵⁸.

La **financiación** de estos organismos proviene de distintas fuentes: del gobierno del Estado, de ONG, de fundaciones de derechos humanos, de la comunidad internacional... Tienen un coste elevado, que la experiencia ha cifrado entre cinco y diez millones de dólares estadounidenses⁵⁹, pero aun así menor que el de instaurar un tribunal internacional. Las aportaciones también pueden darse en especie, mediante la cesión de instalaciones o recursos logísticos. En ningún caso puede tratarse de una financiación condicional, y la comisión debe garantizar su absoluta independencia de sus financiadores⁶⁰.

Al finalizar su investigación, la comisión debe concluir su tarea redactando y publicando un **informe** que contenga las conclusiones alcanzadas a partir de la información obtenida a lo largo de su mandato, analizando las violaciones de los derechos humanos cometidas y los factores que las propiciaron, lo que permite reconstruir un relato de los hechos lo más cercano posible a la realidad, y que sea aceptado como la verdad oficial⁶¹. Estas conclusiones se deben transmitir con objetividad y transparencia, sin realizar juicios de valor ni determinar responsabilidades individuales. En el informe también se pueden incluir recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes⁶², señalando los puntos vulnerables de la estructura política y realizando propuestas de reforma legal o institucional, como la implementación de garantías de no repetición y medidas para luchar contra la impunidad⁶³. A veces se crean mecanismos de seguimiento para supervisar la aplicación de las recomendaciones; en Sierra Leona, la propia Ley de febrero de 2000, de creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, obligaba al gobierno *a priori* a poner en práctica las recomendaciones que le dirigiera la comisión⁶⁴. En el informe, que deberá ser publicado y ampliamente difundido, se recoge

⁵⁸ GONZÁLEZ, E. y VARNEY, H., *op. cit.*, p. 16.

⁵⁹ *Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto: comisiones de la verdad*, Naciones Unidas (ACNUDH), Nueva York y Ginebra, 2006, p. 6.

⁶⁰ Principio 10 del Informe Joinet. Postura defendida por IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 750-751.

⁶¹ HAYNER, P. B. *op. cit.*, pp. 35 y 50-52.

⁶² IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 771-774.

⁶³ En El Salvador, las recomendaciones de la Comisión desencadenaron una amplia reforma del sistema judicial, prohibiendo, entre otras cosas, la admisión como prueba de las llamadas «confesiones extrajudiciales», pues promovían la tortura en los interrogatorios. HAYNER, P. B. *ibid.*, p. 165.

⁶⁴ *The Truth and Reconciliation Act of Sierra Leone* (2000) establece, en su artículo 17, que el gobierno «aplicará fielmente y con prontitud las recomendaciones del informe dirigidas a organismos del Estado y fomentará o facilitará la puesta en práctica de cualquier recomendación dirigida a otras entidades».

el legado de la comisión de la verdad, cuyo impacto a largo plazo en la sociedad se podrá medir a partir de su grado de difusión, su acogida global y la efectiva aplicación de sus recomendaciones⁶⁵.

En ocasiones se han creado organismos que, por no ajustarse estrictamente a las propiedades que caracterizan a una comisión de la verdad, no pueden considerarse como tales. Se trata de comisiones de investigación constituidas al margen del sistema del Estado, pero con objetivos similares a los que persigue una comisión de la verdad. Dado su carácter extraoficial, suelen contar con un menor volumen de recursos y visibilidad, pero ejercen un fuerte impacto en las víctimas y llevan a cabo un trabajo de documentación muy útil, que a veces desencadena una actuación oficial⁶⁶. Este es el caso del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), a cargo de la Iglesia Católica guatemalteca, que elaboró el informe *Guatemala, Nunca más*, de cuya información se benefició la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) constituida en 1994⁶⁷.

3.2. Los objetivos de una comisión de la verdad y el papel protagonista de las víctimas

Toda comisión de la verdad centra su actividad en la búsqueda de la verdad histórica sobre un pasado reciente, pero de forma amplia suele perseguir un objetivo múltiple que incluye todas o alguna de las siguientes metas: «descubrir, clarificar y reconocer formalmente abusos del pasado; responder a necesidades concretas de las víctimas; contribuir a la justicia y al rendimiento de cuentas; hacer un esbozo de la responsabilidad institucional y recomendar reformas; y alentar la reconciliación y reducir los conflictos en torno al pasado»⁶⁸.

No obstante, la adaptación de este esquema general a cada comisión depende de lo dispuesto en el mandato, que suele reflejar las circunstancias concretas de la coyuntura política y social del país en el que opera.

⁶⁵ *Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto: comisiones de la verdad*, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Nueva York y Ginebra, 2006, pp. 19-20.

⁶⁶ HAYNER, P. B. *op. cit.*, p. 39.

⁶⁷ GONZÁLEZ, E. y VARNEY, H. *op. cit.*, p. 14.

⁶⁸ HAYNER, P. B. *op. cit.*, p. 48.

En todo caso, el objetivo más inmediato y evidente es el esclarecimiento de la verdad acerca de unos determinados hechos constitutivos de graves violaciones de los derechos humanos que tuvieron lugar en la época que constituye el período de investigación. La labor de investigación de la comisión debe lograr establecer un relato fidedigno de los acontecimientos, e indagar en las causas y factores que favorecieron su producción⁶⁹. Si bien sus reducidos recursos y la brevedad de su duración no les permiten documentar el alcance de todos los abusos y el daño infligido a cada víctima, sí pretenden reconstruir los hechos acaecidos, a partir de testimonios e investigaciones, con el fin de fijar una sola versión sobre aquellos hechos que son objeto de discusión, o levantar el velo de hechos negados, promoviendo su reconocimiento oficial (por ejemplo, las prácticas de torturas a la población negra en el *apartheid* sudafricano, que eran generalmente conocidas por la población⁷⁰). Su trabajo permite sacar a la luz una verdad en la que la sociedad se vea reflejada, permitiendo la identificación colectiva con ese relato y la construcción de una memoria histórica en torno a él, de forma que los pasados agravios a los derechos humanos no queden en el olvido⁷¹.

Las víctimas de los abusos son la principal figura alrededor de la cual se desenvuelve la actividad de las comisiones de la verdad, que están concebidas, primordialmente, como un medio de protección y satisfacción de sus derechos. Las víctimas ejercen un papel protagonista, ya que, a través de este mecanismo, se trata de atender a sus necesidades e intereses más esenciales: son su objeto de atención y protección, y los principales destinatarios de su labor⁷².

La principal función que cumplen, en este sentido, las comisiones de la verdad es la satisfacción del derecho a la verdad del que son titulares las víctimas y sus allegados. En el análisis de la pauta general de los hechos se da voz a las víctimas para que puedan compartir públicamente su historia personal, y así hacerlas partícipes de la construcción de la que será la verdad oficial, e incluso son las fuentes primarias de información de la comisión; a diferencia de la justicia penal, que se centra en la investigación de los actos de un acusado, y solo se solicita la intervención de alguna de las víctimas si su testimonio

⁶⁹ GONZÁLEZ, E. y VARNEY, H. *op. cit.*, p. 13; IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 729-739.

⁷⁰ «En algunos países, los defensores de los derechos insisten en que una comisión de la verdad, más que descubrir nuevas realidades, lo que hace es apartar el velo de negación que cubre verdades que no se mencionan pero que todo el mundo conoce». HAYNER, P. B. *op. cit.*, p. 49.

⁷¹ HAYNER, P. B. *ibíd.*, p. 219.

⁷² GONZÁLEZ, E. y VARNEY, H. *op. cit.*, p. 15.

puede aportar hechos útiles para la determinación de la responsabilidad individual del autor, desentendiéndose después de ella. Asimismo, la aparición de su testimonio en el informe final, y especialmente la declaración en audiencias públicas, favorece la comprensión e interiorización por parte de la población del sufrimiento de las víctimas, así como el reconocimiento general de sus derechos⁷³.

No obstante, aunque dar a las víctimas la oportunidad de ser oídas puede tener un efecto catártico, en algunas ocasiones puede ser contraproducente⁷⁴. La narración de la propia historia ante una comisión de la verdad puede provocar una sensación de alivio y de curación interna, al sentirse en un ambiente seguro, escuchadas y apoyadas; sin embargo, en otros casos el gran impacto emocional que esto supone hace revivir el sufrimiento o el miedo a represalias, provocando la recaída en el trauma. En el caso de la Comisión sudafricana, entre el 50% y el 60% de las víctimas que declararon ante la comisión se arrepintió de ello o sufrió efectos adversos, según el Centro Terapéutico para Víctimas de Violencia y Tortura de Ciudad del Cabo⁷⁵. En definitiva, en algunas víctimas predomina el interés por conocer la verdad sobre un pasado oscuro y otras prefieren recuperarse a través del olvido, pues desenterrar sus recuerdos reactiva su dolor. Con carácter general, las exigencias éticas y políticas recomiendan la constitución de una comisión de la verdad, pues no afrontar un pasado de graves crímenes contra los derechos humanos conlleva el riesgo de repetir situaciones similares, y nunca alcanzar una completa reconciliación; no obstante, ésta no es una regla universalmente aplicable, pues la sociedad en cuestión puede no estar interesada en desvelar la verdad para no remover su pasado reciente, ya sea porque no existe voluntad por parte de las víctimas o porque se ha logrado la reconciliación de la comunidad por otros medios y no se quiere poner en peligro⁷⁶.

La labor de las comisiones también hace posible indirectamente la realización de otros derechos de las víctimas, especialmente a través de sus recomendaciones; por ejemplo,

⁷³ HAYNER, P. B. *op. cit.*, pp. 52-53.

⁷⁴ HAYNER, P. B. *op. cit.*, p. 180.

⁷⁵ En HAYNER, P. B. *op. cit.*, p. 172, la autora ejemplifica la tensión entre ambas posturas comparando el caso de los sudafricanos Sylvia Dlomo-Jele, cuyo hijo había sido asesinado por fuerzas estatales y para quien la comisión de la verdad tuvo un efecto cicatrizante; y Marius Schoon, que perdió a su familia por la explosión de una bomba y que era partidario de culpar al sistema y no individualizar la responsabilidad, pues el conocimiento de la verdad le provocó estrés postraumático y sed de venganza personal.

⁷⁶ Es el caso de Mozambique, donde la guerra civil finalizó en 1992 con la firma de un acuerdo de paz, y se adoptó una política de reconciliación basada en un amplio consenso social de no indagar en el pasado. Sobre este caso, HAYNER, P. B. *op. cit.*, pp. 221-228.

aunque no pueden responder directamente a las demandas de reparación de las víctimas, pueden instar a los poderes públicos a crear programas de reparación que planteen medidas de resarcimiento⁷⁷. En algunos casos se destinan a las víctimas o a sus familiares sumas de dinero en concepto de compensación; aunque ninguna cantidad puede compensar el sufrimiento de las víctimas o la pérdida de un ser querido, su finalidad es que las víctimas las perciban como una disculpa oficial y, en algunos casos, también que cubran necesidades básicas de aquellos que han perdido sus bienes y propiedades, han quedado impedidas para desempeñar un trabajo físico o han perdido el sostén económico familiar⁷⁸. En otros casos, se ha honrado a las víctimas a través de memoriales, homenajes o actos simbólicos. En Chile, tras la publicación del Informe Rettig⁷⁹ en 1991, el presidente de la República, Patricio Aylwin, pidió disculpas en nombre del Estado en un discurso televisado⁸⁰. La implantación de medidas semejantes depende del compromiso de las autoridades competentes, pues no forman parte de la acción directa de la comisión, sino de su espíritu y legado.

Otra función importante que debe cumplir una comisión es la prestación de una debida asistencia a las víctimas en distintos ámbitos, tanto durante su intervención como con posterioridad. Por regla general, toda comisión cuenta con servicios específicos para el cuidado y la rehabilitación de las víctimas que cooperan con ella: a través de un equipo de profesionales de la salud mental, ofrecen apoyo psicológico a las víctimas para ayudarles a contar su experiencia y superar el trauma que les ha provocado; también deben velar por su seguridad (muchas lo hacen a través de la creación de un programa de protección de testigos, pues a veces reciben amenazas por sus declaraciones) y algunas incluso les proporcionan ayuda legal⁸¹. Si, por falta de recursos o de personal capacitado, la comisión no les proporciona ayuda de estas características, es común acudir a asociaciones independientes de víctimas, donde encuentran un apoyo reconfortante (un ejemplo sería el de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, una asociación de víctimas fundada por mujeres a cuyos hijos la dictadura militar hizo desaparecer)⁸².

⁷⁷ *Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto: comisiones de la verdad*, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Nueva York y Ginebra, 2006, pp. 28-29.

⁷⁸ En Chile, en virtud de un programa de reparación, los familiares de los asesinados reciben una suma mensual, además de prestaciones sanitarias y educativas. HAYNER, P. B. *op. cit.*, p. 204.

⁷⁹ Llamado así en honor al presidente de la Comisión chilena, el jurista y político Raúl Rettig.

⁸⁰ HAYNER, P. B. *op. cit.*, p. 126.

⁸¹ HAYNER, P. B. *op. cit.*, p. 180.

⁸² *Ibid.*, p. 175-176.

Una comisión también debe impedir la repetición de las violaciones de derechos humanos, a través de medidas que constituyan garantías de no repetición, esencialmente dirigiendo recomendaciones a las autoridades competentes. Estas recomendaciones pueden incluir reformas en el sistema judicial, cambios legislativos, la depuración de las Fuerzas Armadas y otras instituciones... Todas estas iniciativas contribuyen a la superación definitiva del conflicto, borrando toda huella del período anterior, con el fin último de fomentar la reconciliación de una sociedad dividida para construir un proyecto de futuro común sobre los cimientos de un estado de derecho sólido⁸³.

La experiencia ha consagrado el enfrentarse al pasado como estrategia de reconciliación más efectiva. Por regla general, no hay auténtica reconciliación sin verdad, sin fijar una única versión del pasado con la que se identifique la población; para alcanzar una auténtica reconciliación es esencial que las víctimas la perciban como tal, por lo que atender sus derechos es indispensable para dejar atrás la confrontación y establecer una paz social duradera⁸⁴.

3.3. Interacción con la dimensión retributiva de la justicia

En el marco de la justicia transicional, las comisiones de la verdad están intrínsecamente ligadas a la justicia penal, que constituye la dimensión punitiva de la justicia. La principal conexión entre ellas es que contribuir a la administración de justicia se configura como uno de los objetivos que puede plantearse una comisión de la verdad: al finalizar su mandato, la comisión ha recopilado y ordenado una gran cantidad de información relevante, que puede ser muy útil para sustentar una potencial persecución criminal si se pone a disposición del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial competente⁸⁵. Además de facilitar información, si lo considera oportuno puede recomendar en su informe final el ejercicio de acciones penales contra los perpetradores de crímenes contra los derechos humanos, especialmente si considera que ha quedado probada su culpabilidad y que la determinación de su responsabilidad penal es conveniente para hacer plenamente efectivo el derecho a la justicia de las víctimas. Un ejemplo es el Informe *Nunca Más*, elaborado por la CONADEP argentina, que resultó

⁸³ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 529-538.

⁸⁴ GONZÁLEZ, E. y VARNEY, H. *op. cit.*, p. 15.

⁸⁵ HAYNER, P. B. *op. cit.*, pp. 52 y 129-133.

crucial para incoar los llamados Juicios de las Juntas⁸⁶. Asimismo, es frecuente que el propio informe emitido por la comisión sea empleado como fuente probatoria en un proceso penal, como hizo el juez español Baltasar Garzón para solicitar la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet⁸⁷.

Sin embargo, la estrecha relación de colaboración que suele existir entre una comisión de la verdad y los tribunales entraña ciertos riesgos: si la comisión ha resuelto transmitir a la justicia la información recabada es posible que los responsables se resistan a confesar sus crímenes para evitar ser sometidos a un enjuiciamiento criminal, lo que obstaculizaría la búsqueda de la verdad, al faltar importantes testimonios⁸⁸. Por ello, a alguna comisión su mandato le ha otorgado la facultad de ofrecer inmunidad civil y penal con respecto a lo testificado ante la comisión, o incluso el poder de conceder la amnistía a cambio de su colaboración⁸⁹. No obstante, la amnistía debe abordarse con delicadeza, ya que promueve la impunidad de los responsables, sacrificando la justicia retributiva a cambio de la verdad y la reconciliación. Además, la concesión de amnistías por crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio está prohibida por el derecho internacional⁹⁰, por lo que solo podría darse fuera de estos supuestos. La inmunidad parcial, por el contrario, no es objeto de ninguna prohibición, pues solo implica que su testimonio ante la comisión no podrá admitirse como prueba judicial⁹¹.

⁸⁶ En su Capítulo VI, que contiene las recomendaciones, aconseja «que el poder judicial se aboque adecuadamente a la agilización de los trámites investigativos y de comprobación de las denuncias recibidas por esta Comisión». Informe *Nunca Más*, 1983. Disponible en: <http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/argentina/informe-de-la-CONADEP-Nunca-mas.htm>

⁸⁷ Auto del Juzgado Central de Instrucción N°5, de 16 de octubre de 1998, por el que se decreta la prisión provisional incondicional de Augusto Pinochet y se cursa la orden de captura internacional.

⁸⁸ *Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto: comisiones de la verdad*, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Nueva York y Ginebra, 2006, p. 27.

⁸⁹ La única que ha ejercido este poder de «amnistía a cambio de la verdad» ha sido la Comisión sudafricana (1995-1998), cuyo mandato le permitía conceder amnistías individuales, siempre que se demostrara la motivación política del crimen, y solo después de la comparecencia y confesión del autor. *Comisionar la justicia: las comisiones de la verdad y la justicia penal*, Amnistía Internacional, Madrid, 2010, p. 6.

⁹⁰ Así lo establece el *Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad*, Principio 24: restricciones, y otras medidas relativas a la amnistía (E/CN.4/2005/102/Add.1). También se refleja en el *Informe del Secretario General sobre el Estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos* (S/2004/616).

⁹¹ *Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto: comisiones de la verdad*, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Nueva York y Ginebra, 2006, pp. 10-11.

Si los culpables fueran amnistiados, muchas comisiones han proporcionado una lista de los responsables o, al menos, los ha mencionado en su informe⁹². La publicación de los nombres de los perpetradores es parte del proceso de revelación de la verdad y, aunque no determina su responsabilidad penal, su imagen queda marcada para siempre, y los condena a vivir en una sociedad que no los perdonará.

En todo caso, las comisiones de la verdad se complementan con la acción judicial porque cada una tiene sus propias limitaciones, que se ven compensadas con la intervención de la otra: mientras la justicia penal, de carácter marcadamente retributivo, está enfocada en determinar responsabilidades individuales e imponer sanciones a los criminales, las comisiones de la verdad se erigen como el modelo paradigmático de la justicia restaurativa, con un mayor protagonismo de la víctima y centradas en su reincorporación a la sociedad, por medio de la reparación del daño y la reconciliación con los victimarios. No es frecuente la presencia de una comisión de la verdad operativa en un país donde ya se ha iniciado un proceso penal con el mismo objeto, ya que su constitución suele responder a un contexto de debilidad de la esfera judicial, ya sea porque se encuentra sometida a un control político, corrompida por un régimen dictatorial anterior o sin medios suficientes para llevar a cabo un proceso criminal con garantías⁹³. Sin embargo, es más común la coexistencia de comisiones con tribunales internacionales en un mismo territorio, lo que ha dado pie a ciertas tensiones procesales, como ocurrió en Sierra Leona⁹⁴. La experiencia de la Comisión de la verdad yugoslava, constituida en 2001, es única: inició su labor durante el mandato del TPIY, y se la dotó con el poder de conceder amnistías a los victimarios a cambio de su testimonio; fue disuelta en 2003 sin elaborar un informe final, acusada de tratar de sustraer al expresidente Slobodan Milosevic, procesado por crímenes de guerra, del enjuiciamiento del TPIY⁹⁵. Esta motivación constituye una deformación de la naturaleza de una comisión de la verdad, que en ningún caso debe obstaculizar la intervención de la justicia penal ni sustituir su

⁹² Por ejemplo, en el Informe de la Comisión de la Verdad para el Salvador, *De la locura a la esperanza* (1993), p. 156.

⁹³ HAYNER, P. B. *op. cit.*, pp. 116-119.

⁹⁴ La Comisión de la Verdad y la Reconciliación (constituida en el año 2000) y el Tribunal Especial (en 2002) no colaboraron entre sí ni intercambiaron ningún tipo de información, y la opinión pública no tenía clara la diferencia entre ambos organismos.

⁹⁵ *Comisionar la justicia: las comisiones de la verdad y la justicia penal*, Amnistía Internacional, Madrid, 2010, p. 12.

función, ya que no puede establecer responsabilidades individuales⁹⁶, por lo que bajo ningún pretexto debe ser constituida con este propósito.

4. Los mecanismos jurisdiccionales internos de compensación de las víctimas

La acción judicial proporciona un medio efectivo a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos para la satisfacción de su derecho a la justicia, entendido en su dimensión retributiva. La función de los tribunales nacionales es la de ofrecer a los agraviados una vía de acceso a la jurisdicción en el marco de una tutela judicial efectiva⁹⁷, en cumplimiento del artículo 8 de la DUDH⁹⁸; y, por otro lado, determinar la responsabilidad penal individual de los perpetradores e imponerles la sanción correspondiente⁹⁹. Las víctimas desempeñan un papel secundario en la actuación de los mecanismos jurisdiccionales, pero una sentencia condenatoria puede conllevar la concesión de una reparación en forma de indemnización o, en todo caso, de carácter simbólico¹⁰⁰.

La sensibilización de la comunidad internacional y la consiguiente evolución de la tutela de los derechos humanos en el plano internacional han potenciado la creación de un ámbito similar de protección en el ámbito nacional, con la convicción de que cada Estado tiene el deber de garantizar la observancia de los derechos humanos dentro de sus fronteras¹⁰¹.

⁹⁶ Informe Joinet, Principio 7: «Las comisiones no tienen vocación de substituir a la justicia civil, administrativa o penal, que será la única competente para establecer la responsabilidad, principalmente, penal individual, de cara a pronunciarse sobre la culpabilidad y, en su caso, sobre la pena».

⁹⁷ PUEYO LOSA, J., «El principio de jurisdicción universal y el Estatuto de la Corte Penal Internacional», en *El derecho internacional humanitario ante los retos de los conflictos armados actuales*, Rodríguez-Villasante y Prieto (coord.), Marcial Pons, Madrid y Barcelona, 2006, p. 181.

⁹⁸ Artículo 8 DUDH: «Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales **nacionales** competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley».

⁹⁹ ORIHUELA CALATAYUD, E., «Aplicación del Derecho Internacional Humanitario por las jurisdicciones nacionales», en *Creación de una jurisdicción penal internacional*, Colección Escuela Diplomática nº 4. AEPDIRI. BOE, Madrid, 2000, p. 238.

¹⁰⁰ PÉREZ CEPEDA, A. «Principio de Justicia penal universal versus principio de Jurisdicción penal internacional», en *El principio de justicia universal: fundamentos y límites* [libro electrónico], Pérez Cepeda (dir.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 99 [consultado el 20 de abril de 2020]. Disponible en <https://biblioteca-tirant-com.cuarzo.unizar.es:9443/cloudLibrary/ebook/show/9788490047828#ulNotainformativaTitle>

¹⁰¹ Artículo 28 DUDH: «Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos». En este sentido, el artículo 10.2 de la Constitución española establece lo siguiente: «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad

Hasta la creación de la CPI, la represión y la sanción de las violaciones del derecho penal internacional correspondían en exclusiva a los tribunales nacionales, por lo que los Estados eran los únicos capaces de impedir la impunidad de las conductas internacionalmente lesivas¹⁰². Hoy en día su participación se ha matizado, pero continúan realizando una labor esencial y prioritaria en el enjuiciamiento de estos crímenes.

Los tribunales internos fundamentan el ejercicio de su jurisdicción penal en diversos títulos habilitantes, que les conceden competencia en virtud de diferentes vínculos con el objeto del litigio. La mayor parte de los procesos se rigen por el principio de territorialidad, que ampara la competencia judicial de un Estado sobre los hechos delictivos acontecidos dentro de sus límites territoriales; no obstante, el juez nacional también puede basar su intervención en la nacionalidad del presunto delincuente (principio de personalidad activa) o de la víctima (principio de personalidad pasiva), actuar cuando se vean involucrados los intereses fundamentales del Estado (principio de protección) o, incluso, cuando no exista conexión alguna con el hecho enjuiciado, pero la gravedad y la trascendencia internacional de los crímenes lo justifican (principio de jurisdicción universal)¹⁰³. La legislación española enuncia todos estos principios excepto el de personalidad pasiva (artículo 23 de la LOPJ).

4.1. Alcance de la jurisdicción de los tribunales internos mediante la aplicación de la legislación nacional

El vínculo más directo que pueden alegar los órganos jurisdiccionales de un Estado para incoar un proceso penal es el principio de territorialidad, que les otorga competencia sobre los delitos cometidos dentro de su territorio, con independencia de la nacionalidad de los presuntos criminales o de las víctimas, y de cualesquiera otras circunstancias del caso¹⁰⁴.

con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España».

¹⁰² ORIHUELA CALATAYUD, E., «Aplicación del Derecho Internacional Humanitario por las jurisdicciones nacionales», en *Creación de una jurisdicción penal internacional*, Colección Escuela Diplomática nº 4. AEPDIRI. BOE, Madrid, 2000, p. 237.

¹⁰³ *Ibíd.*, p. 243. También se hace referencia a estos títulos habilitantes en PIGRAU SOLÉ, A., *La jurisdicción universal y su aplicación en España*, Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans, Barcelona, 2009, p. 18.

¹⁰⁴ *La jurisdicción universal: preguntas y respuestas* [recurso electrónico], Amnistía Internacional, Londres, 2001, p. 3 [consultado el 17 de abril de 2020]. Disponible en <https://www.amnesty.org/download/Documents/128000/ior530202001es.pdf>

La jurisdicción territorial se erige como el modelo tradicional de represión judicial penal, y existe un acuerdo generalizado sobre la prioridad de los tribunales del lugar donde se han cometido los hechos¹⁰⁵ para enjuiciarlos conforme a su propia legislación criminal, siempre que respete los estándares internacionales¹⁰⁶. Los tribunales domésticos presentan importantes ventajas (mayor facilidad para la práctica de la prueba, mejor accesibilidad de víctimas y testigos, reconocimiento generalizado de un mayor grado de legitimidad...) que, *a priori*, los convierten en el medio de enjuiciamiento idóneo¹⁰⁷.

Entre los Estados que han abierto una causa penal por crímenes de relevancia internacional ocurridos dentro de sus fronteras cabe mencionar los casos de Argentina, que en 1985 condenó a nueve integrantes de las Juntas militares por crímenes de lesa humanidad¹⁰⁸; y Perú, cuya Corte Suprema procesó al expresidente Alberto Fujimori por violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante su mandato, y lo condenó a 25 años de prisión¹⁰⁹.

No obstante, es necesaria la existencia de una estructura estatal sólida, basada en el estado de derecho, que permita llevar a cabo una administración de justicia eficaz y con las debidas garantías procesales: permitiendo el acceso a la justicia a las víctimas para defender sus intereses, y asegurando la imparcialidad e independencia de los tribunales, para que dicten una sentencia justa derivada de un análisis objetivo de la conducta del acusado. En resumen, es esencial que el aparato judicial interno del Estado donde hayan tenido lugar los crímenes muestre disposición para ejercer su jurisdicción, con la intención de impartir auténtica justicia, y esté en condiciones de hacerlo de acuerdo con las garantías que exige el derecho internacional¹¹⁰.

¹⁰⁵ PIGRAU SOLÉ, A., *La jurisdicción universal y su aplicación en España*, Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans, Barcelona, 2009, p. 71. En esta misma dirección, SORIANO RODRÍGUEZ, M., «El principio de jurisdicción universal y la reforma del art. 23.4 LOPJ, ¿un paso atrás en la lucha contra la impunidad?», en *Revista Digital Facultad de Derecho*, n° 6, 2013, p. 335, que se apoya en la Resolución de la AGNU 3074 (XXVIII), 3 de diciembre de 1973, párr. 5: *Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad*.

¹⁰⁶ La legislación interna debe ser acorde al Derecho internacional humanitario y a la DUDH, tal y como insta a los Estados la Resolución 60/147 de la AGNU, de 16 de diciembre de 2005, en su principio 3° (II).

¹⁰⁷ PIGRAU SOLÉ, A., *op. cit.*, p. 141.

¹⁰⁸ CAPELLÀ I ROIG, M., «Los crímenes contra la humanidad en el caso Scilingo», en *Revista Electrónica de Estudios Internacionales* [revista electrónica], n. 10, 2005 [consultado el 24 de abril de 2020], p. 1.

¹⁰⁹ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 194-195.

¹¹⁰ *La jurisdicción universal: preguntas y respuestas* [recurso electrónico], Amnistía Internacional, Londres, 2001, p. 8 [consultado el 17 de abril de 2020]. Disponible en <https://www.amnesty.org/download/Documents/128000/ior530202001es.pdf>; también en PIGRAU SOLÉ, A., *op. cit.*, p. 140.

Dada la naturaleza de los más graves crímenes internacionales (genocidio, torturas, delitos de lesa humanidad...), parece evidente que rara vez se presentan aislados, y se perpetran con la connivencia de las autoridades del Estado, o incluso derivan de su autoría directa¹¹¹. Por ello, el sistema judicial estatal suele ser débil o corrupto, con injerencias políticas que coartan la independencia judicial; en ocasiones también existen leyes de amnistía, que suspenden la aplicación de la ley penal en relación a un determinado crimen¹¹², debido a circunstancias excepcionales¹¹³.

Las leyes de amnistía se aprueban, esencialmente, en contextos de justicia transicional, sacrificando la justicia retributiva para allanar el camino hacia la reconciliación y reconstrucción social, o para facilitar la labor de una comisión de la verdad; es decir, su promulgación implica priorizar el valor paz sobre el valor justicia¹¹⁴. Para Margarita Robles Carrillo¹¹⁵, toda amnistía debe cumplir unas condiciones mínimas de legitimidad: debe abarcar crímenes concretos y sujetos definidos, permitir posibilidades alternativas de rendición de cuentas para evitar fomentar la impunidad, surgir de una iniciativa democrática o consultiva, invocarse como último recurso para garantizar la paz y no extenderse, en ningún caso, a crímenes de naturaleza internacional.

Numerosas voces internacionales instan a la derogación de las leyes de amnistía, especialmente cuando abarcan crímenes internacionales, para impedir la impunidad de sus perpetradores¹¹⁶. En este sentido se han pronunciado la AGNU¹¹⁷, la Conferencia de Derechos Humanos de 1993¹¹⁸, y la ya extinta Comisión de Derechos Humanos de la

¹¹¹ PIGRAU SOLÉ, A., *op. cit.*, p. 70.

¹¹² IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *Justicia Transicional y Comisiones de la Verdad*, 2ª ed., Berg Institute, Madrid, 2017, p. 646.

¹¹³ VÁZQUEZ SERRANO, I., «La amnistía: un obstáculo al ejercicio de la jurisdicción universal sobre crímenes internacionales. El caso de España», en *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho (CEFD)* [revista electrónica], n.º 39, 2019, p. 3 [consultado el 22 de abril de 2020]. Disponible en <https://ojs.uv.es/index.php/CEFD/article/view/13957>

¹¹⁴ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, p. 649.

¹¹⁵ ROBLES CARRILLO, M.; «El principio de jurisdicción universal: estado actual y perspectivas de evolución», *Revista Electrónica de Derecho Internacional (AEPDIRI)*, LXVI, 2014, p. 92.

¹¹⁶ VÁZQUEZ SERRANO, I., *op. cit.*, p. 7; también apoya esta postura PHILIPPE, X., «Los principios de jurisdicción universal y complementariedad: su interconexión», en *International Review of the Red Cross* [revista electrónica], n. 862, 2006 [consultado 22 de marzo de 2020], p. 15. Disponible en https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/irrc_862_philippe.pdf

¹¹⁷ Artículo 18 de la *Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas*, aprobada por la Resolución 47/133 de la AGNU, de 18 de diciembre de 1992.

¹¹⁸ Conferencia Mundial de Derechos Humanos. *Declaración y Programa de Acción de Viena* (Doc. A/CONF.157/23), de 12 de julio de 1993, Sección II, párr. 60, disponible en https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf

ONU¹¹⁹, así como fuentes jurisprudenciales, entre las que destaca la sentencia de la Corte IDH en el caso *Barrios Altos*, que declara inadmisibles las disposiciones de amnistía y prescripción relativas a los crímenes más graves, como la tortura y las desapariciones forzadas, por menoscabar los derechos de las víctimas¹²⁰.

Estos obstáculos demuestran que el Estado donde se cometen los crímenes puede convertirse, paradójicamente, en un refugio para los responsables. Por tanto, el principio de territorialidad no debe erigirse como título exclusivo para afirmar la jurisdicción de un Estado¹²¹, sino que debe existir una combinación de principios que lo complementen, permitiendo que entren en juego mecanismos como la jurisdicción universal y los tribunales internacionales, dada la trascendencia internacional de los crímenes contra los derechos humanos¹²².

La sensibilización de la sociedad internacional por estos actos inhumanos ha fortalecido los instrumentos de prevención y represión para intensificar la lucha contra la impunidad, adoptando un discurso de protección a las víctimas de los agravios¹²³, que siempre deben tener a su disposición un medio para ejercitar acciones penales y exigir responsabilidades¹²⁴. La cooperación internacional descentralizada ha dado a luz un nuevo modelo de represión de los crímenes basado en el ejercicio de la jurisdicción universal por los tribunales internos¹²⁵.

¹¹⁹ Principio 24 del *Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad*. Informe de Diane Orentlicher. Doc. ONU E/CN.4/2005/102. 18 de febrero de 2005.

¹²⁰ Sentencia de 14 de marzo de 2001, caso *Barrios Altos* (*Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú*), Corte IDH, Serie C, núm. 75, párrafos 41-44. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_75_esp.pdf

¹²¹ PIGRAU SOLÉ, A., *op. cit.*, p. 72.

¹²² SORIANO RODRÍGUEZ, M., «El principio de jurisdicción universal y la reforma del art. 23.4 LOPJ, ¿un paso atrás en la lucha contra la impunidad?», en *Revista Digital Facultad de Derecho*, nº 6, 2013, p. 330.

¹²³ PUEYO LOSA, J., «El principio de jurisdicción universal y el Estatuto de la Corte Penal Internacional», en *El derecho internacional humanitario ante los retos de los conflictos armados actuales*, Rodríguez-Villasante y Prieto (coord.), Marcial Pons, Madrid y Barcelona, 2006, p. 185.

¹²⁴ PIGRAU SOLÉ, A., *op. cit.*, p. 141.

¹²⁵ Se debe conceder la jurisdicción al foro más adecuado al principio *pro actione*, según se deriva de SORIANO RODRÍGUEZ, M., «El principio de jurisdicción universal y la reforma del art. 23.4 LOPJ, ¿un paso atrás en la lucha contra la impunidad?», en *Revista Digital Facultad de Derecho*, nº 6, 2013, p. 336.

4.2. La problemática de la justicia universal

4.2.1. Características y límites del principio de jurisdicción universal

El principio de jurisdicción universal otorga a un Estado la facultad, o incluso le impone la obligación, de enjuiciar determinados crímenes y violaciones de derechos humanos que, en atención a su gravedad, deben ser perseguidos por el conjunto de la comunidad internacional, con total independencia del lugar donde se han cometido y de la nacionalidad de los autores o de las víctimas¹²⁶.

Según lo dispuesto en los Principios de Princeton sobre la Jurisdicción Universal (2001)¹²⁷, ésta debe fundamentarse exclusivamente en criterios materiales relativos a la trascendencia de los crímenes¹²⁸, por lo que la ausencia de vínculo alguno con el Estado del foro es irrelevante a ojos del derecho internacional¹²⁹. La lógica subyacente a esta atribución de jurisdicción extraterritorial es que los crímenes perseguidos atentan, por su naturaleza, contra la paz y la seguridad internacionales, lo que legitima la intervención jurisdiccional de cualquier Estado en defensa de los intereses de la comunidad internacional¹³⁰. El objetivo último es, por tanto, reducir al mínimo los espacios de impunidad, fomentando la cooperación internacional para someter los hechos a la acción de la justicia¹³¹, y así lograr una aproximación al ideal de la “justicia universal”¹³².

¹²⁶ El principio de jurisdicción universal ha sido definido por la doctrina en numerosas ocasiones; a modo de ejemplo, he basado esta definición en las concepciones de PHILIPPE, X., «Los principios de jurisdicción universal y complementariedad: su interconexión», en *International Review of the Red Cross* [revista electrónica], n. 862, 2006 [consultado 22 de marzo de 2020], pp. 3-4; y SORIANO RODRÍGUEZ, M., *op. cit.*, p. 327, que se remite a OLLÉ SESÉ, M., *Justicia Universal para crímenes internacionales*, La Ley, Madrid, 2008. También da una definición Amnistía Internacional en su documento *La jurisdicción universal: preguntas y respuestas* [recurso electrónico], Amnistía Internacional, Londres, 2001, p. 3.

¹²⁷ Un conjunto de directrices generales dirigidas a orientar a los Estados en relación con la jurisdicción universal, elaborado y sistematizado por juristas de todo el mundo reunidos en la Universidad de Princeton. Este elenco de principios fue recogido y publicado por la AGNU en su sesión de 4 de diciembre de 2001: Doc. ONU A/56/677 (2001). Disponible en <http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/princeton.html>

¹²⁸ Principio nº 1 de Princeton: «Se entiende por jurisdicción universal una jurisdicción penal sustentada exclusivamente en la naturaleza del delito, prescindiendo del lugar en que éste se haya cometido, la nacionalidad del autor presunto o condenado, la nacionalidad de la víctima o cualquier otro nexo con el Estado que ejerza esa jurisdicción». Esta misma idea se recoge en PIGRAU SOLÉ, A., *op. cit.*, p. 24.

¹²⁹ *La jurisdicción universal: preguntas y respuestas* [recurso electrónico], Amnistía Internacional, Londres, 2001, p. 3.

¹³⁰ PHILIPPE, X., *op. cit.*, p. 4.

¹³¹ Párrafos 4 y 6 del Estatuto de la CPI.

¹³² PUEYO LOSA, J., «El principio de jurisdicción universal y el Estatuto de la Corte Penal Internacional», en *El derecho internacional humanitario ante los retos de los conflictos armados actuales*, Rodríguez-Villasante y Prieto (coord.), Marcial Pons, Madrid y Barcelona, 2006, pp. 185 y 195.

La base jurídica del principio de jurisdicción universal comprende tres tipos de fuentes: los convenios internacionales, la costumbre internacional y la propia legislación nacional¹³³. Tras la Segunda Guerra Mundial proliferó el desarrollo de convenciones dirigidas a prevenir y sancionar determinados delitos de carácter internacional, que suelen incorporar cláusulas de jurisdicción universal; de esta forma, cuando un Estado las ratifica, asume un compromiso de perseguir y enjuiciar a los responsables de un determinado delito, sea cual sea su nacionalidad y el lugar de comisión de los hechos¹³⁴. Esta obligación se contiene, por ejemplo, en las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 (en lo relativo a los crímenes de guerra)¹³⁵; o en la Convención Internacional sobre la represión y el castigo del crimen de *apartheid* (artículo 4), adoptada por la AGNU en su Resolución 3068 (XXVIII), de 30 de noviembre de 1973. La obligación de los Estados firmantes se traduce en conferir jurisdicción a sus tribunales sobre determinados crímenes internacionales, y ejercer su jurisdicción de forma efectiva¹³⁶.

Sin embargo, «en la mayor parte de los convenios multilaterales que articulan la cooperación penal internacional, la jurisdicción universal es facultativa»¹³⁷. En este sentido se pronuncian la Convención de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1984, contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes¹³⁸; o la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas¹³⁹; e instrumentos normativos regionales, como las Convenciones Interamericanas para la prevención y la sanción de la tortura, de 12 de septiembre de 1985, y sobre desaparición forzada de personas, de 6 de septiembre de 1994 (artículos 4 y 12, respectivamente).

No obstante, esta facultad se convierte en obligación cuando el presunto culpable se encuentra en el territorio del Estado, al entrar en juego el principio *aut dedere aut*

¹³³ PHILIPPE, X., *op. cit.*, p. 13; también ORIHUELA CALATAYUD, E., *op. cit.*, pp. 243-252.

¹³⁴ Principio 21 de Joinet-Orentlicher: «Los Estados deberían tomar las medidas necesarias para que sus tribunales puedan ejercer la jurisdicción universal en la medida en que lo permite el derecho internacional así como para permitirles cumplir con las obligaciones que le imponen las fuentes de derecho aplicable (...) de someter a juicio en su territorio a las personas sospechosas de haber cometido delitos (...)».

¹³⁵ Artículos 49, 59, 129 y 146 (segundo párrafo) de las respectivas Convenciones: «Cada una de las Partes contratantes tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, o mandado cometer, cualquiera de las infracciones graves, debiendo hacerlas comparecer ante sus propios tribunales, sea cual fuere la nacionalidad de ellas. (...)».

¹³⁶ PUEYO LOSA, J., *op. cit.*, pp. 185-186.

¹³⁷ PIGRAU SOLÉ, A., *op. cit.*, p. 26.

¹³⁸ Artículo 5.3: «La presente Convención no excluye ninguna jurisdicción penal ejercida de conformidad con las leyes nacionales».

¹³⁹ Artículo 9.3. Convención adoptada por la AGNU en su Resolución 61/177, de 20 de diciembre de 2006.

iudicare. Este principio impone una obligación alternativa al Estado que ocupa la posición de *iudex apprehensionis*¹⁴⁰, que consiste en el deber de extraditar al presunto responsable o bien juzgarlo en su propia jurisdicción nacional: debe enjuiciarlo, y solo elude esa obligación si concede la extradición a otro Estado interesado o lo pone a disposición de un tribunal internacional¹⁴¹. En contadas ocasiones, el principio *aut dedere aut iudicare* se ha plasmado de tal manera que el nacimiento de la obligación de juzgar se condiciona a la denegación de una previa solicitud de extradición¹⁴²; mientras no se formule tal solicitud, el Estado no está obligado a juzgar¹⁴³. No obstante, la CIJ ha confirmado en el asunto *Habré*¹⁴⁴ que, a menos que así se establezca expresamente, no es necesaria la previa denegación de la extradición para que surja el deber de actuación del Estado¹⁴⁵. Este principio trata de garantizar el enjuiciamiento de los responsables de crímenes internacionales, por una u otra vía, y está recogido en la mayoría de los convenios que contemplan la jurisdicción universal facultativa¹⁴⁶; así, con carácter general los Estados tienen la *obligación* de enjuiciar al sospechoso cuando está en su territorio, y la *facultad* de hacerlo cuando está fuera de sus fronteras¹⁴⁷.

El ejercicio de la jurisdicción universal también puede apoyarse en el derecho consuetudinario internacional. Aunque la cuestión no está exenta de polémica entre la doctrina, su reconocimiento como norma consuetudinaria goza de aceptación generalizada¹⁴⁸. La costumbre internacional tiene el mismo valor normativo que el

¹⁴⁰ Juez del lugar donde el acusado se encuentra.

¹⁴¹ ORIHUELA CALATAYUD, E., «La obligación *aut dedere aut iudicare* y su cumplimiento en España», en *Revista Española de Derecho Internacional* [revista electrónica], Vol. LXVIII, 2, 2016, Madrid [consultado el 4 de abril de 2020], p. 208. Disponible en <http://www.revista-redi.es/es/articulos/la-obligacion-aut-dedere-aut-iudicare-y-su-cumplimiento-en-espana/>

¹⁴² Es el caso de la Convención de Naciones Unidas, de 15 de noviembre de 2000, contra la delincuencia organizada transnacional (artículos 15.3 y 16.10); o del Convenio Europeo para la represión del terrorismo de 1977 (artículo 7).

¹⁴³ ORIHUELA CALATAYUD, E., *op. cit.*, p. 212; y PIGRAU SOLÉ, A., *op. cit.*, pp. 27-30.

¹⁴⁴ Sentencia de la CIJ en *Bélgica vs. Senegal sobre cuestiones relativas a la obligación de procesar o extraditar*, de 20 de julio de 2012. Se trata del asunto *Habré*, el expresidente del Chad que se refugia en Senegal y éste se niega a extraditarlo a Bélgica. Esta sentencia clarifica la naturaleza y alcance de la obligación de extraditar o juzgar en relación con la Convención contra la Tortura, y es extrapolable al resto de convenios internacionales.

¹⁴⁵ Esta es la llamada *fórmula de La Haya*, recogida en la mayoría de convenios en esta materia, que proviene del artículo 7 de la Convención sobre represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, adoptada en La Haya el 16 de diciembre de 1970.

¹⁴⁶ En este sentido, artículo 5.2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; y artículo 9.2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

¹⁴⁷ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, p. 642.

¹⁴⁸ Aunque los orígenes más remotos de la construcción teórica de la jurisdicción universal se remontan a Hugo Grocio (*De iure belli ac pacis*), el primer precedente judicial que reconoce la jurisdicción universal

derecho escrito, pero en la práctica constituye un fundamento más ambiguo, por lo que los jueces nacionales pueden utilizarla como base para ejercer su jurisdicción universal, pero no tiene la solidez suficiente para imponer a un Estado la obligación de ejercerla¹⁴⁹. La inclusión de determinados crímenes en el Estatuto de la CPI puede emplearse para afirmar la existencia de una *opinio iuris* favorable a su gravedad e interés universal, lo que constituiría una prueba de la cristalización del principio¹⁵⁰, con base en el párrafo 6 de su Preámbulo¹⁵¹.

Por último, el ejercicio de la jurisdicción universal también puede derivar directamente de la legislación nacional, mediante la asunción de un compromiso voluntario, aunque no exista una normativa internacional que lo exija¹⁵².

Aunque generalmente se aplica solo a un *numerus clausus* de crímenes (graves violaciones del derecho internacional humanitario), no existe un único instrumento de derecho internacional que defina un elenco tasado de actos susceptibles de someterse a la jurisdicción universal¹⁵³. No obstante, se han elaborado diversos documentos que contienen recomendaciones y directrices que sirven de guía en la aplicación del principio. En este sentido, los mencionados Principios de Princeton hacen referencia a los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, la tortura, la piratería y la esclavitud¹⁵⁴; Amnistía Internacional añade las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales¹⁵⁵; y la ONG Human Rights Watch también considera conveniente su aplicación al terrorismo y al apoderamiento ilícito de aeronaves¹⁵⁶.

es la Sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el caso *Lotus* (Turquía vs. Francia), de 7 de septiembre de 1927. Así lo establece SORIANO RODRÍGUEZ, M., *op. cit.*, p. 10.

¹⁴⁹ PHILIPPE, X., *op. cit.*, pp. 13-14.

¹⁵⁰ ORIHUELA CALATAYUD, E., «Aplicación del Derecho Internacional Humanitario por las jurisdicciones nacionales», en *Creación de una jurisdicción penal internacional*, Colección Escuela Diplomática nº 4. AEPDIRI. BOE, Madrid, 2000, p. 252.

¹⁵¹ Párrafo 6 del Preámbulo del Estatuto de la CPI: «Recordando que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales».

¹⁵² PHILIPPE, X., *op. cit.*, p. 14.

¹⁵³ ORIHUELA CALATAYUD, E., *op. cit.*, p. 244.

¹⁵⁴ Principio nº 2 de Princeton.

¹⁵⁵ Principio nº 1. *Catorce principios fundamentales sobre el ejercicio de la jurisdicción universal* [recurso electrónico], Amnistía Internacional, Londres, 1999 [consultado el 24 de abril de 2020]. Disponible en <https://www.amnesty.org/download/Documents/148000/ior530011999es.pdf>

¹⁵⁶ *Basic Facts on Universal Jurisdiction* [recurso electrónico], Human Rights Watch, 2009 [consultado el 30 de abril de 2020]. Disponible en: <https://www.hrw.org/news/2009/10/19/basic-facts-universal-jurisdiction>

Las víctimas de los crímenes desempeñan un papel protagonista como principales artífices y destinatarios del reconocimiento de la jurisdicción universal. En atención al mencionado artículo 8 de la DUDH, siempre deben tener a su disposición un tribunal al que acudir para someter a juicio los abusos que han sufrido; dado que esta tutela judicial efectiva no siempre está garantizada en los Estados donde se han cometido dichos crímenes contra los derechos humanos, la jurisdicción universal constituye el medio idóneo para proporcionar a la víctima un foro para litigar contra el victimario, en el que pueda hacer efectivos sus derechos y obtener una reparación adecuada¹⁵⁷. En virtud de este principio, cualquier Estado puede proporcionar esta tutela a las víctimas, incluso cuando no presenta vínculo alguno con los hechos acaecidos. Una de las finalidades subyacentes a la justicia universal es que, en casos de abusos de los derechos humanos cometidos por un régimen político que ostenta el poder en un país, las víctimas que han huido al exilio solo pueden acudir a los tribunales de su Estado de acogida, independientemente de si existe algún vínculo con el objeto del litigio o no¹⁵⁸. La AGNU, en su Resolución 60/147, reconoce como derechos básicos de las víctimas de violaciones de derechos humanos el acceso a la justicia y la interposición de recursos efectivos, sin hacer distinciones de lugar¹⁵⁹; Amnistía Internacional promueve la participación de las víctimas en los procesos judiciales, señalando la importancia de proteger sus intereses y hacer efectivos sus derechos sin importar el Estado del foro¹⁶⁰, en los mismos términos que los Principios de Joinet-Orentlicher¹⁶¹.

En el análisis de la implantación del principio de jurisdicción universal en el derecho comparado debemos distinguir dos dimensiones: la incorporación legislativa y la práctica judicial¹⁶². Durante décadas se constataba una brecha entre ellas: la justicia universal gozaba de un amplio reconocimiento formal en diversos ordenamientos nacionales, pero su aplicación efectiva era prácticamente nula¹⁶³. Hoy en día, sin embargo, la idea de la

¹⁵⁷ SORIANO RODRÍGUEZ, M., *op. cit.*, p. 321-322.

¹⁵⁸ PUEYO LOSA, J., *op. cit.*, p. 187.

¹⁵⁹ Resolución número 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 16 de diciembre de 2005. Principios VII y VIII.

¹⁶⁰ Principio nº 11. *Catorce principios fundamentales sobre el ejercicio de la jurisdicción universal* [recurso electrónico], Amnistía Internacional, Londres, 1999 [consultado el 24 de abril de 2020]. Disponible en <https://www.amnesty.org/download/Documents/148000/ior530011999es.pdf>

¹⁶¹ Principio 19 del *Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Informe de Diane Orentlicher*. Doc. ONU E/CN.4/2005/102. 18 de febrero de 2005.

¹⁶² SORIANO RODRÍGUEZ, M., *op. cit.*, pp. 337-338.

¹⁶³ PHILIPPE, X., *op. cit.*, p. 6.

justicia universal ha calado en la conciencia colectiva, y las denuncias y querellas interpuestas con base en este principio se han incrementado considerablemente¹⁶⁴; este avance contrasta, sin embargo, con una progresiva restricción legal de su alcance, motivada por el deterioro de las relaciones diplomáticas que supone su ejercicio y el rechazo de lo que muchos consideran injerencias en la competencia exclusiva de un Estado soberano¹⁶⁵.

Esta tendencia regresiva puede provocar que, en la práctica, numerosos Estados incumplan las obligaciones asumidas con la adhesión a convenios internacionales, al realizar una trasposición insuficiente de las disposiciones convencionales¹⁶⁶. Además, las divergencias entre distintos países en el alcance de la incorporación del principio a la legislación interna dan lugar a agravios comparativos, por la falta de homogeneidad en su operatividad¹⁶⁷.

El primer proceso que podemos considerar basado en este principio fue el entablado en Israel contra Adolf Eichmann¹⁶⁸, pero los Estados más activos en la aplicación de la jurisdicción universal han sido tradicionalmente Bélgica y España, cuya legislación interna recogía inicialmente una amplia configuración del principio, convirtiéndose en referentes a nivel mundial¹⁶⁹. A España haré referencia en el próximo epígrafe. En Bélgica, una Ley de 1993¹⁷⁰ tipificaba los crímenes de guerra (y, con la modificación operada en 1999¹⁷¹, también los crímenes de lesa humanidad y de genocidio) y reconocía en su artículo 7 una amplia jurisdicción universal de los tribunales belgas. Esto convirtió a Bélgica en un foro muy solicitado por las víctimas de violaciones de derechos humanos, y ante sus tribunales se interpusieron denuncias relacionadas con el conflicto de Ruanda, la guerra de Iraq o la matanza de civiles en campos de refugiados libaneses por las

¹⁶⁴ Según un estudio realizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), según recoge el Informe del Secretario General ante la AGNU sobre el alcance y la aplicación del principio de jurisdicción universal (A/72/112), 22 de junio de 2017, pp. 9-10. Disponible en <https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/72/112>

¹⁶⁵ SÁNCHEZ LEGIDO, A., «El fin del modelo español de jurisdicción universal», en *Revista Electrónica de Estudios Internacionales* [revista electrónica], nº 27, 2014 [consultado 24 de abril de 2020], p. 14. Disponible en <http://www.reei.org/index.php/revista/num27/articulos/fin-modelo-espanol-jurisdiccion-universal>

¹⁶⁶ PUEYO LOSA, J., *op. cit.*, p. 193.

¹⁶⁷ VÁZQUEZ SERRANO, I., *op. cit.*, p. 207.

¹⁶⁸ Capturado en Argentina por los servicios secretos israelíes, este dirigente nazi fue juzgado y condenado en 1961 por crímenes de guerra y de lesa humanidad. PIGRAU SOLÉ, A., *op. cit.*, p. 50.

¹⁶⁹ PUEYO LOSA, J., *op. cit.*, p. 200-204.

¹⁷⁰ Ley de 16 de junio de 1993, relativa a la represión de las infracciones graves a las Convenciones de Ginebra de 1949 y a los Protocolos I y II de 1977.

¹⁷¹ Por la Ley de 10 de febrero de 1999, relativa a la represión de las violaciones graves del Derecho internacional humanitario.

autoridades israelíes¹⁷². Sin embargo, la polémica desatada en este último caso y las fuertes presiones recibidas desencadenaron la adopción de una nueva Ley en 2003, por la que se modifica la Ley de 1993 con importantes restricciones para el ejercicio de la jurisdicción universal, limitando el ejercicio de acciones penales a la petición de la Fiscalía, impidiendo a las víctimas acudir directamente al juez de instrucción¹⁷³.

El hecho de que el principio de jurisdicción universal se haya ejercitado principalmente en países europeos con respecto a crímenes cometidos en África y Latinoamérica ha sido calificado de neocolonialismo jurídico¹⁷⁴; no obstante, en la actualidad se aprecia un proceso de cambio: la progresiva desactivación del principio en Europa contrasta con el progreso global y la auténtica universalización de la jurisdicción¹⁷⁵. Uno de los casos paradigmáticos de este avance es el de Hissène Habré, expresidente del Chad acusado de torturas contra el que se abrió un proceso penal en Senegal: tras no prosperar una primera acusación en 2001¹⁷⁶, Senegal rechazó en 2005 una solicitud de extradición procedente de Bélgica, y llevó a cabo reformas legales y constitucionales para, finalmente, iniciar el juicio contra Habré en 2013 en las recién constituidas Cámaras Extraordinarias Africanas¹⁷⁷; en 2016, el dictador fue condenado a cadena perpetua por torturas y crímenes contra la humanidad.

Otras críticas que enfrenta la jurisdicción universal son el elevado empleo de recursos, su discutida legitimidad (ante las acusaciones de injerencia), y las dificultades de práctica de la prueba o para garantizar la participación de víctimas y testigos, que reducen las expectativas de éxito del enjuiciamiento¹⁷⁸. También es un obstáculo la no presencia del acusado en el territorio del Estado, ya que entonces será necesario solicitar la extradición

¹⁷² La denuncia fue presentada contra los dirigentes militares israelíes Ariel Sharon y Amos Yaron. La actuación de Bélgica en ejercicio de la jurisdicción universal se recoge en PIGRAU SOLÉ, A., *op. cit.*, p. 41-43.

¹⁷³ PUEYO LOSA, J., *op. cit.*, p. 201.

¹⁷⁴ ROBLES CARRILLO, M.; “El principio de jurisdicción universal: estado actual y perspectivas de evolución”, *Revista Electrónica de Derecho Internacional*, LXVI, 2014, pp. 96-98.

¹⁷⁵ En África, por ejemplo, el impulso a la jurisdicción universal se materializa en los Principios de El Cairo-Arusha (2001-2002), que reflejan la aproximación/desarrollo africano en la materia. ROBLES CARRILLO, M., *idídem*, p. 104.

¹⁷⁶ La Corte de Casación senegalesa se consideró incompetente para conocer de actos cometidos por ciudadanos extranjeros fuera de su territorio, pues, aunque Senegal había ratificado la Convención contra la tortura, no había incorporado la jurisdicción universal a su ordenamiento interno. *La jurisdicción universal: preguntas y respuestas* [recurso electrónico], Amnistía Internacional, Londres, 2001, p. 5.

¹⁷⁷ ROBLES CARRILLO, M., *op. cit.*, p. 107.

¹⁷⁸ SORIANO RODRÍGUEZ, M., *op. cit.*, pp. 12-18.

para incoar del proceso ¹⁷⁹, y ésta está supeditada a la cooperación judicial internacional¹⁸⁰.

La cuestión de la inmunidad de los altos representantes de un Estado ante tribunales extranjeros ha despertado un debate en relación con la jurisdicción universal. Apoyándose en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, está generalizada la vigencia de esta inmunidad penal por los actos realizados en el ejercicio de su cargo, y así lo ha confirmado la Sentencia de la CIJ en el asunto *Yerodia*¹⁸¹; sin embargo, los delitos internacionales graves no pueden considerarse actos inherentes al desempeño de un cargo público, por lo que no deberían quedar cubiertos por esa inmunidad¹⁸². La pugna por restringir el ámbito de la impunidad, en lugar de aplicarla en términos absolutos, ha sido alentada en los Principios de Princeton¹⁸³, y respaldada por organizaciones como Amnistía Internacional¹⁸⁴. Además, esta inmunidad solo se extiende a jefes de Estado o miembros del gobierno en activo¹⁸⁵.

No constituyen un obstáculo, sin embargo, las disposiciones de amnistía dictadas en el Estado en el que se cometieron los crímenes, que nunca pueden desplegar un efecto extraterritorial¹⁸⁶, por lo que no pueden impedir el ejercicio de la jurisdicción universal por un Estado extranjero¹⁸⁷. De hecho, si el Estado que sufrió los crímenes renuncia a su jurisdicción, es esencial el enjuiciamiento a través de otras vías como la jurisdicción universal para evitar la impunidad¹⁸⁸.

¹⁷⁹ Los estándares internacionales no consideran aceptable el juicio *in absentia*. *La jurisdicción universal: preguntas y respuestas* [recurso electrónico], Amnistía Internacional, Londres, 2001, p. 3.

¹⁸⁰ PIGRAU SOLÉ, A., *op. cit.*, p. 70.

¹⁸¹ Sentencia de la CIJ en el asunto *República Democrática del Congo vs. Bélgica sobre la orden de detención de 11 de abril de 2000*, de 14 de febrero de 2002. La Corte consideró que el Ministro de Asuntos Exteriores Abdulaye Yerodia gozaba de inmunidad personal y, por tanto, no podía ser extraditado a Bélgica.

¹⁸² ROBLES CARRILLO, M., *op. cit.*, p. 87-88.

¹⁸³ Principio nº 5: «Con respecto a los delitos graves de derecho internacional que se enumeran en el párrafo 1 del Principio 2, la función oficial de un acusado, sea en calidad de Jefe de Estado o de Gobierno o de funcionario competente, no le exonerará de responsabilidad penal ni atenuará su pena».

¹⁸⁴ *La jurisdicción universal: preguntas y respuestas* [recurso electrónico], Amnistía Internacional, Londres, 2001, p. 2.

¹⁸⁵ Así se pronunció el Comité Judicial de la Cámara de los Lores británica en marzo de 1999, al considerar que el dictador chileno Pinochet podía ser extraditado a España dado que ya no ocupaba la jefatura de Estado chilena. PIGRAU SOLÉ, A., *op. cit.*, p. 54.

¹⁸⁶ Son actos de soberanía interna, según VÁZQUEZ SERRANO, I., «La amnistía: un obstáculo al ejercicio de la jurisdicción universal sobre crímenes internacionales. El caso de España», en *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho (CEFD)* [revista electrónica], nº 39, 2019 [consultado el 22 de abril de 2020], p. 210-211. Disponible en <https://ojs.uv.es/index.php/CEFD/article/view/13957>

¹⁸⁷ Principios de Princeton (nº 7) y Principios de El Cairo-Arusha (nº 15).

¹⁸⁸ VÁZQUEZ SERRANO, I., *op. cit.*, p. 216.

Por último, en cuanto a la prescripción, la AGNU ha considerado que el transcurso del tiempo no imposibilita la persecución de las violaciones más graves de las normas internacionales sobre derechos humanos ¹⁸⁹ ; el apoyo generalizado a la imprescriptibilidad de estos crímenes se materializa en convenios internacionales que prohíben su prescripción ¹⁹⁰ , e incluso en su cristalización como derecho consuetudinario¹⁹¹.

4.2.2. Auge y caída de la jurisdicción universal en España

El artículo 23 de la LOPJ recoge los criterios de atribución de jurisdicción a los tribunales españoles en el orden penal, entre los que se alude al principio de jurisdicción universal (artículo 23.4)¹⁹² en relación con los crímenes internacionales más graves¹⁹³, encomendando su instrucción y enjuiciamiento a la Audiencia Nacional ¹⁹⁴. En su redacción original, de 1985, este principio tenía carácter absoluto, pues no exigía la existencia de vínculos con el objeto del litigio, dotándole de un alcance puramente universal. Esta amplia configuración posicionó a España como Estado pionero en la aplicación de la jurisdicción universal, y lo convirtió un modelo de la respuesta judicial internacional contra la impunidad¹⁹⁵.

Los primeros casos en que los tribunales españoles basaron su jurisdicción en el artículo 23.4 de la LOPJ fueron las denuncias interpuestas en 1998 contra los crímenes de las dictaduras militares argentina y chilena, y la querella presentada en 1999 por genocidio, terrorismo de Estado y torturas en Guatemala. En el marco de estos procesos colectivos se disgregaron procesos individuales, entre los que cabe destacar los del dictador chileno Augusto Pinochet y los militares argentinos Ricardo Cavallo y, especialmente, Adolfo Scilingo¹⁹⁶.

¹⁸⁹ La mencionada Resolución 60/147 (IV).

¹⁹⁰ La AGNU adoptó en 1968 la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, mediante su Resolución 2391 (XXIII) de 26 de noviembre.

¹⁹¹ PIGRAU SOLÉ, A., *op. cit.*, p. 65-67 y 126-127. Así lo ha reconocido, entre otras, la Sentencia de la Corte IDH en el *Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile*, de 26 de septiembre de 2006.

¹⁹² También recoge el principio de territorialidad (artículo 23.1), de personalidad activa (23.2) y de protección de los intereses fundamentales del Estado (23.3).

¹⁹³ Se extiende al genocidio, el terrorismo, la piratería o la corrupción de menores, entre otros, además de existir una cláusula residual que recoge los contenidos en tratados internacionales ratificados por España. PIGRAU SOLÉ, A., p. 87.

¹⁹⁴ Artículo 65.1.e) de la LOPJ: «Delitos cometidos fuera del territorio nacional».

¹⁹⁵ SÁNCHEZ LEGIDO, A., *op. cit.*, p. 3.

¹⁹⁶ PIGRAU SOLÉ, p. 94.

El caso de Pinochet tuvo gran trascendencia internacional; fue detenido en Londres en octubre de 1998 a instancias del auto de detención emitido por el juez Baltasar Garzón¹⁹⁷, que posteriormente tramitaría una solicitud de extradición, a la que se sumaron otras peticiones similares procedentes de tribunales belgas, suizos y franceses. Las autoridades británicas, a través del Comité Judicial de la Cámara de los Lores, aceptaron su extradición a España, pero finalmente ésta no se produjo por razones de salud, y Pinochet regresó a Chile. No obstante, allí se iniciaron procedimientos penales contra él, que se mantuvieron abiertos hasta su muerte en 2006¹⁹⁸.

Ricardo Cavallo fue detenido en México en agosto de 2000 acusado de genocidio y terrorismo, y entregado a las autoridades españolas, que habían solicitado su extradición. No obstante, tras la anulación de las leyes de amnistía argentinas¹⁹⁹, la Audiencia Nacional se inhibió en favor de la jurisdicción argentina, donde fue procesado²⁰⁰.

Sin embargo, el caso más relevante es el de Adolfo Scilingo, pues es el primero que la Audiencia Nacional española, apoyándose en el principio de universalidad, ha concluido con sentencia condenatoria²⁰¹. Además, el interés del caso reside en su interpretación innovadora de las normas penales internacionales: la **Sentencia de la AN núm. 16/2005, de 19 de abril**, que lo declaró culpable de crímenes de lesa humanidad, se basó directamente en la legislación internacional, considerando que la sanción de estos crímenes se contiene en una norma consuetudinaria anterior al momento de comisión de los hechos, y no únicamente en normas escritas posteriores, por lo que no se vulnera el principio de legalidad²⁰².

En la historia procesal del caso Guatemala se evidencian las divergencias existentes en los distintos sectores de la judicatura española con respecto a la jurisdicción universal. A pesar de que el Juzgado Central de Instrucción nº1 afirmó su competencia para conocer del genocidio del pueblo maya (en su Auto de 27 de marzo de 2000), la Sala de lo Penal

¹⁹⁷ Antiguo titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, fue una de las figuras clave en el ejercicio español de la jurisdicción universal.

¹⁹⁸ PIGRAU SOLÉ, *op. cit.*, p. 94.

¹⁹⁹ La Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida fueron declaradas nulas por la Corte Suprema de Argentina el 14 de junio de 2005. PIGRAU SOLÉ, *ibíd.*, p. 95.

²⁰⁰ PIGRAU SOLÉ, *ibíd.*, p. 141.

²⁰¹ PIGRAU SOLÉ, *ibíd.*, pp. 95-96.

²⁰² CAPELLÀ I ROIG, M., «Los crímenes contra la humanidad en el caso Scilingo», en *Revista Electrónica de Estudios Internacionales* [revista electrónica], n. 10, 2005, pp. 5-10 [consultado 24 de abril de 2020]. Disponible en <http://www.reei.org/index.php/revista/num10/articulos/crimenes-contra-humanidad-caso-scilingo>

de la AN rechazó esta decisión (en su Auto de 13 de diciembre de 2000), amparándose en la subsidiariedad de la jurisdicción universal con respecto a la territorial, y considerando que el sistema judicial de Guatemala estaba en condiciones de iniciar el enjuiciamiento de los hechos, aunque aún no lo hubiera hecho²⁰³. El Tribunal Supremo²⁰⁴ fue más allá en la interpretación restrictiva del principio, exigiendo que el caso presentara vínculos con los intereses de España para legitimar la acción penal de los tribunales españoles²⁰⁵. Sin embargo, el Tribunal Constitucional²⁰⁶ anuló ambas resoluciones y mantuvo una concepción amplia de la jurisdicción universal, señalando que se fundamenta únicamente en la entidad de los delitos, siendo innecesaria la conexión con España²⁰⁷; este pronunciamiento reactivó el caso Guatemala y afirmó el carácter absoluto del principio de universalidad reconocido en el artículo 23.4 de la LOPJ.

Así, la jurisdicción española se erigió como un referente mundial en la aplicación del principio de jurisdicción universal, y se convirtió en un foro predilecto de las víctimas de delitos internacionales, aunque no tuvieran conexión alguna con España. Durante este período se abrieron diligencias contra dirigentes militares israelíes por presuntos crímenes de lesa humanidad contra población palestina; contra altos dirigentes del Gobierno de Ruanda y de organizaciones paramilitares acusados de crímenes de guerra, genocidio y torturas; contra las autoridades chinas por el genocidio del Tíbet y la persecución del grupo religioso Falun Gong; o contra militares estadounidenses por su implicación en la muerte del cámara español José Couso en Iraq, considerándola un crimen de guerra²⁰⁸.

La actuación de la jurisdicción española tuvo un efecto positivo en los Estados donde se habían cometido los crímenes, impulsando investigaciones y procedimientos posteriores en Guatemala, Argentina o Chile²⁰⁹.

²⁰³ PIGRAU SOLÉ, A., *op. cit.*, pp. 98 y 113.

²⁰⁴ En la STS 327/2003, de 25 de febrero.

²⁰⁵ SORIANO RODRÍGUEZ, M., *op. cit.*, p. 28. Por eso, y ante la no presencia de los acusados en España, el TS dictaminó que la AN solo podía conocer del ataque a la embajada española en Guatemala, con víctimas de nacionalidad española, pero no del genocidio maya. PIGRAU SOLÉ, A., *op. cit.*, p. 114.

²⁰⁶ STC 237/2005, de 26 de septiembre.

²⁰⁷ SORIANO RODRÍGUEZ, M., *op. cit.*, p. 29 realiza una comparación de ambas resoluciones; en PIGRAU SOLÉ, A., *op. cit.*, pp. 99 y 115-116 podemos encontrar una presentación esquemática de los avances en el caso Guatemala.

²⁰⁸ Estos son algunos de los casos más relevantes. Todas las actuaciones se detallan en PIGRAU SOLÉ, A., *op. cit.*, pp. 93-108.

²⁰⁹ PIGRAU SOLÉ, A., *ibíd.*, p. 125; en lo referente a Argentina, PUEYO LOSA, J., *op. cit.*, pp. 190-191.

No obstante, la redacción del principio de universalidad en la legislación española experimentó limitaciones en línea con la tendencia europea de restringir su ámbito de aplicación. Aparte de la ley aprobada en 2003 para la adaptación del ordenamiento español al Estatuto de la CPI²¹⁰, no se habían producido modificaciones legales en la delimitación del principio de jurisdicción universal hasta 2009. En ese año se introducen requisitos adicionales para su ejercicio²¹¹: la presencia del presunto responsable en territorio español, la existencia de víctimas con nacionalidad española o la constatación de «algún vínculo de conexión relevante con España». Esta restricción fue justificada como un intento de clarificar los criterios de aplicación del principio, no perjudicar las relaciones diplomáticas de España y reducir el número de causas abiertas ante los tribunales españoles para aligerar su carga procesal²¹². Sin embargo, se pudo salvar un cierto margen de discrecionalidad judicial con la fórmula de los vínculos relevantes con España, que abría las puertas a una interpretación amplia²¹³.

En 2014 se llevó a cabo una nueva reforma legal²¹⁴ que supuso una reformulación íntegra del artículo 23.4 de la LOPJ, endureciendo aún más los requisitos necesarios para el ejercicio de la jurisdicción universal, y restringiéndolo a supuestos tasados. Suprimió la acción popular, excluyendo la actuación de organizaciones de derechos humanos o asociaciones de víctimas, exigiendo que las acciones penales se emprendan directamente por el agraviado o por el Ministerio Fiscal²¹⁵.

Además, la LOPJ impone condiciones específicas para el ejercicio de la jurisdicción en cada tipo penal, exigiendo mayores conexiones con España: con respecto a los *core crimes*²¹⁶, reconoce la jurisdicción española siempre que el procedimiento se dirija contra un español (lo cual ya estaba previsto por el artículo 23.2) o un extranjero residente en España; además, el requisito de presencia del sospechoso en territorio español se hace

²¹⁰ La LO 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional, tuvo cierto impacto en la regulación de la jurisdicción universal, impulsando la tipificación de los crímenes objeto de la competencia de la CPI e implantando un principio de complementariedad con el tribunal internacional. Para comprender los efectos de esta legislación, *ved.* PIGRAU SOLÉ, A., *op. cit.*, pp. 117-120.

²¹¹ A modo de disposiciones complementarias recogidas en la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.

²¹² SORIANO RODRÍGUEZ, M., *op. cit.*, pp. 31-33.

²¹³ SÁNCHEZ LEGIDO, A., *op. cit.*, p. 23.

²¹⁴ A través de la aprobación de la LO 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la LOPJ, relativa a la justicia universal.

²¹⁵ SÁNCHEZ LEGIDO, A., *op. cit.*, p. 5.

²¹⁶ Genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, según los denomina SÁNCHEZ LEGIDO, A., *op. cit.*, p. 36.

más restrictivo, al imponer como *conditio sine qua non* una previa denegación de extradición para que los tribunales españoles puedan ejercer su jurisdicción²¹⁷. Con respecto a la tortura y la desaparición forzada, también habilita a los tribunales españoles si las víctimas ostentan la nacionalidad española en el momento de la comisión del delito, siempre que los responsables estén en suelo español²¹⁸.

En definitiva, el objetivo de la reforma es restringir el ejercicio de la jurisdicción universal al mínimo exigible por el derecho internacional, según se desprende de la Exposición de Motivos de la LO 1/2014²¹⁹; así la extensión extraterritorial de la jurisdicción española se circunscribirá a las obligaciones internacionalmente adquiridas. No obstante, esta concepción minimalista corre el riesgo de desvirtuar completamente el principio de jurisdicción universal, y ha recibido una valoración negativa desde ciertos sectores de la doctrina y la judicatura²²⁰.

En 2018, el Tribunal Constitucional avaló la reforma²²¹, pero recordando la obligación de acatar los tratados internacionales, y advirtiendo del riesgo de desprotección de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos, que fueron las más perjudicadas por la reforma. Para ellas, a veces la jurisdicción universal constituye la única vía de reparación judicial, ya que la propia razón de ser de la justicia universal es la prestación de una tutela judicial efectiva cuando la víctima no ha podido hacer efectivos sus derechos ante ningún otro tribunal²²².

Los tribunales españoles han conservado, pese a todo, ciertas facultades para ejercer la jurisdicción universal, aunque con límites muy rígidos. En junio de 2020 dio comienzo la más reciente actuación de la Audiencia Nacional con fundamento en este principio: el juicio por el asesinato de Ignacio Ellacuría, un jesuita de nacionalidad española víctima de una matanza orquestada en El Salvador en 1989, en la que estuvieron presuntamente

²¹⁷ Esta exigencia es dudosamente compatible con la Sentencia de la CIJ en el mencionado asunto *Habré (Bélgica vs. Senegal)*, 20 de julio de 2012).

²¹⁸ Todos los detalles de la reforma están recogidos en SÁNCHEZ LEGIDO, A., *op. cit.*, pp. 36-37.

²¹⁹ Exposición de Motivos, segundo párrafo: «Hoy en día la jurisdicción universal no puede concebirse sino desde los límites y exigencias propias del Derecho Internacional».

²²⁰ ORIHUELA CALATAYUD, E., «La obligación *aut dedere aut iudicare* y su cumplimiento en España», en *Revista Española de Derecho Internacional* [revista electrónica], Vol. LXVIII, 2, 2016, Madrid [consultado el 4 de abril de 2020], p. 227; la Fiscalía de la AN también manifestó su desacuerdo, según ROBLES CARRILLO, M.; “El principio de jurisdicción universal: estado actual y perspectivas de evolución”, *Revista Electrónica de Derecho Internacional*, LXVI, 2014, p. 83.

²²¹ En su STC 140/2018, de 20 de diciembre, en respuesta al recurso de inconstitucionalidad nº 3754-2014, interpuesto por diputados del PSOE.

²²² SÁNCHEZ LEGIDO, A., *op. cit.*, p. 40.

implicados dirigentes militares salvadoreños, entre ellos el exviceministro de Seguridad Pública Inocente Montano, para el que la Fiscalía solicita 150 años de prisión.

4.3.La justicia universal como una posible vía para las víctimas del franquismo

Al finalizar la dictadura franquista en 1975, dio comienzo en España un proceso de transición política. Como parte de ese proceso, y en aras de dejar atrás el pasado reciente y avanzar hacia una democracia fuerte y estable, en 1977 se aprobó la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, que declaró la extinción de la responsabilidad penal de los presos políticos y los que hubieran sido perseguidos durante la dictadura por actos de intencionalidad política; sin embargo, también comprendió en la amnistía los actos de las fuerzas estatales que pudieran calificarse como delito²²³. Su promulgación dejó desamparadas a numerosas víctimas de violaciones graves de derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzosas y ejecuciones sumarias.

En 2014, el Relator Especial de la ONU Pablo de Greiff viajó a España y redactó un *Informe sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición*, que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos ese mismo año. En él alaba el éxito de la transición española en consolidar un sistema democrático sólido sobre la base de la reconciliación, pero señala como materia pendiente responder a las demandas de las víctimas de la dictadura²²⁴, constatando importantes deficiencias en materia de verdad y justicia, aunque reconociendo un amplio desarrollo de la reparación, gracias a la aprobación de Ley de Memoria Histórica²²⁵.

En materia de justicia, señala a la Ley de Amnistía de 1977 como principal obstáculo para incoar procesos penales contra los abusos a los derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista²²⁶. A pesar de la loable intención con la que fue adoptada la ley, que surgió de un gran consenso parlamentario, el Relator Especial la

²²³ Artículo 2 de la Ley 46/1977.

²²⁴ *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición*, Pablo de Greiff: *Misión a España*, Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 22 Julio 2014, A/HRC/27/56/Add.1, pp. 8 y 12-13. [consultado el 14 de marzo de 2020]. Disponible en: http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_12/spl_24/pdfs/7.pdf

²²⁵ Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

²²⁶ *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición*, Pablo de Greiff: *Misión a España*, Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 22 Julio 2014, A/HRC/27/56/Add.1, p 14. [consultado el 14 de marzo de 2020].

considera irreconcilable con los compromisos internacionales asumidos por España²²⁷, al impedir a las víctimas el acceso a la jurisdicción y favorecer la impunidad de graves crímenes de trascendencia internacional.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU se ha pronunciado en este sentido en diversas ocasiones, la última de ellas en 2015²²⁸, recomendando la derogación de la Ley 46/1977 por su incompatibilidad con las disposiciones del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), e instando a impulsar investigaciones sobre violaciones pasadas de los derechos humanos, a identificar y enjuiciar a los responsables y a proporcionar reparaciones a las víctimas.

En 2008, el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la AN, cuyo titular era Baltasar Garzón, admitió a trámite una querella sobre supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, basándose en una interpretación similar de la legalidad²²⁹. Sin embargo, el Pleno de la Sala de lo Penal de la AN sobreseyó el procedimiento²³⁰, considerando competentes a los Juzgados territoriales del lugar de comisión de los hechos, y no a la AN²³¹. Garzón fue acusado de prevaricación y el TS, aunque lo absolvió, consideró que su interpretación de la Ley de Amnistía había sido incorrecta²³².

Ante la imposibilidad de ejercitar acciones penales ante la jurisdicción española, las víctimas acudieron a la jurisdicción universal para satisfacer su derecho a la justicia²³³. En 2010, familiares de víctimas interpusieron una querella en Argentina, apoyados por organizaciones de derechos humanos, reclamando la depuración de responsabilidades penales por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista. El

²²⁷ Hace referencia al artículo 2.3 del PIDCP.

²²⁸ *Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España* (Doc. CCPR/C/ESP/CO/6), Comité de Derechos Humanos de la ONU, 14 de agosto de 2015, p. 7 (párr. 21). Disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fE%2fCO%2f6&Lang=es

²²⁹ Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la AN de 18 de noviembre de 2008, pp. 7 y 33. En él se declara la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía a los delitos que se enjuician y la presunta existencia de una norma consuetudinaria internacional que los consideraría imprescriptibles e impediría su amnistía. Disponible en: https://e00-elmundo.uecdn.es/documentos/2008/11/18/auto_memoria_historica.pdf

²³⁰ Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la AN de 2 de febrero de 2009.

²³¹ VÁZQUEZ SERRANO, I., *op. cit.*, pp. 218-219.

²³² STS nº 101/2012, de 27 de febrero. El TS argumenta que la ley fue promulgada por un Parlamento democrático con el consenso de todas las fuerzas políticas y con el objeto de la reconciliación nacional en un contexto transicional, y su eventual derogación correspondería exclusivamente al Parlamento.

²³³ - *Make Way for Justice nº 3. Universal Jurisdiction Annual Report* [recurso electrónico], TRIAL International, 2017 [consultado el 31 de marzo de 2020], pp. 12-13. Disponible en https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2017/03/UJAR-MEP_A4_012.pdf

procedimiento, que adoptó la denominación de «querella argentina»²³⁴, fue adjudicado a la Jueza María Servini, que reunió más de 5.000 testimonios de víctimas y familiares en los primeros años de su instrucción, y en 2013 emitió órdenes de arresto internacional contra varios de los imputados en el proceso, entre los que se encontraban el ex vicepresidente Rodolfo Martín Villa o antiguos miembros de las fuerzas de seguridad franquistas como Jesús Muñecas Aguilar y Juan Antonio González Pacheco (alias *Billy el Niño*)²³⁵.

Hoy en día, el proceso iniciado por la querella argentina sigue abierto; suma más de 330 querellas acumuladas y ha logrado éxitos como la exhumación de determinadas fosas comunes, pero aún no se ha conseguido tomar declaración a ninguno de los acusados.

5. Los mecanismos jurisdiccionales de compensación de las víctimas en el plano internacional

La creación de tribunales con jurisdicción internacional constituye un paso más en la evolución del derecho penal internacional y en la cooperación transnacional para la lucha contra la impunidad. Los tribunales internacionales son una posibilidad alternativa a la actuación de los órganos nacionales en la represión y sanción de violaciones graves de derecho internacional humanitario; su razón de ser es evitar que, por una legislación humanitaria interna deficiente o inexistente, por falta de capacidad material o de disposición a realizar un juicio justo, o por conflictos de jurisdicción entre Estados, los responsables queden impunes y las víctimas no puedan hacer efectivos sus derechos²³⁶.

El principio de responsabilidad penal internacional del individuo se consolida tras la Segunda Guerra Mundial, con la constitución de los Tribunales de Nuremberg y Tokio²³⁷, encargados de enjuiciar por sus graves crímenes a los más altos responsables de las potencias vencidas. Aunque estos órganos son los precursores de los actuales tribunales

²³⁴ Formalmente, se trata de la causa n° 4591/2010. Disponible en <https://www.cij.gov.ar/nota-14347-Lesa-humanidad-la-jueza-Servini-de-Cubr-a-orden-la-detenci-n-de-20-imputados-por-cr-menes-cometidos-durante-el-franquismo.html>

²³⁵ *Make Way for Justice n° 3. Universal Jurisdiction Annual Report* [recurso electrónico], TRIAL International, 2017 [consultado el 31 de marzo de 2020], p. 13.

²³⁶ OLÁSULO ALONSO, H. et al. (coord.), *Alcance y limitaciones de la justicia internacional*, Vol. IV [libro electrónico], Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 598 [consultado 6 de mayo de 2020].

²³⁷ Formalmente eran el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, constituido mediante el Acuerdo de Londres de 8 de agosto de 1945; y el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, establecido el 19 de enero de 1946.

internacionales, fueron creados por los Estados vencedores de la guerra, por lo que no tenían un carácter verdaderamente internacional, sino multilateral²³⁸.

En la actualidad, la reciente evolución del derecho penal internacional ha impulsado la ampliación de la protección de los derechos humanos y los modos de tutela de las víctimas de su infracción. La gravedad de los crímenes humanitarios justifica el interés internacional en su persecución, y la cooperación internacional ha propiciado la proliferación de tribunales internacionales de diversa naturaleza, un proceso que ha culminado en la creación de una Corte Penal Internacional.

5.1. Los tribunales internacionales *ad hoc*

La creación de tribunales *ad hoc* permitió avanzar hacia una auténtica represión internacional de las infracciones más graves del derecho internacional humanitario. Este mecanismo solo se ha empleado en dos ocasiones: en relación con los conflictos yugoslavo y ruandés que estallaron en la última década del siglo XX²³⁹.

Considerando que la situación en ambos territorios constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad hizo uso de la habilitación del Capítulo VII de la Carta de la ONU²⁴⁰ para instituir sendos tribunales internacionales, a los que se encarga la tarea de investigar las atrocidades cometidas sistemáticamente en estos conflictos internos y enjuiciar a los responsables. La necesidad de su creación se fundamentó en la debilidad de los sistemas judiciales nacionales, que presentaban altos índices de corrupción e injerencia política, lo cual, unido a su falta de recursos, les impedía llevar a cabo juicios justos provistos de todas las garantías procesales²⁴¹.

El primer organismo de esta naturaleza fue el **Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY)**, creado por la Resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad²⁴²

²³⁸ *Los derechos de las víctimas ante la Corte Penal Internacional: manual para víctimas, sus representantes legales y ONG* [recurso electrónico], Federación Internacional por los Derechos Humanos, 2007 [consultado el 1 de mayo de 2020], p. 25. Disponible en <https://www.fidh.org/es/temas/justicia-internacional/corte-penal-internacional-cpi/Los-Derechos-de-las-victimas-ante>

²³⁹ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *Justicia Transicional y Comisiones de la Verdad*, 2ª ed., Berg Institute, Madrid, 2017, pp. 608-609.

²⁴⁰ Artículo 39 de la Carta de la ONU: «El Consejo de Seguridad determinará la existencia de toda amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión y hará recomendaciones o decidirá qué medidas serán tomadas de conformidad con los artículos 41 y 42 para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales».

²⁴¹ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 609-611.

²⁴² Resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 25 de mayo de 1993. S/RES/827. Disponible en [https://undocs.org/es/S/RES/827%20\(1993\)](https://undocs.org/es/S/RES/827%20(1993))

con competencia sobre las violaciones generalizadas de los derechos humanos cometidas en el territorio yugoslavo durante el conflicto balcánico, con especial hincapié en las cometidas en Bosnia-Herzegovina, incluyendo asesinatos en masa o actos de depuración étnica. Un año después, la Resolución 955 (1994) del Consejo de Seguridad²⁴³ estableció el **Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR)**, encomendándole la represión de las infracciones del derecho internacional humanitario cometidas por ciudadanos ruandeses en el territorio de Ruanda y de Estados vecinos desde el 1 de enero de 1994²⁴⁴.

Ambos órganos fueron constituidos como independientes de los sistemas judiciales nacionales, compuestos por personal de distintas nacionalidades y financiados íntegramente por la comunidad internacional, con ánimo de garantizar su imparcialidad y autonomía²⁴⁵. Además de sus marcados límites espacio-temporales, sus respectivos Estatutos les impusieron restricciones materiales en el ejercicio de su jurisdicción, limitándola al genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad²⁴⁶. Con carácter general se concedió primacía a los tribunales internacionales sobre la jurisdicción estatal²⁴⁷, aunque en 2003 el Consejo de Seguridad²⁴⁸ instó a los tribunales *ad hoc* a concentrar su labor en el procesamiento de los altos dirigentes, a quienes se carga con la responsabilidad última de los crímenes, cediendo las causas con inculpadlos de menor importancia a las jurisdicciones nacionales, cuya capacidad pretendía potenciar²⁴⁹.

El TPIR condenó a un total de 61 personas y el TPIY a 90²⁵⁰; finalizaron su labor en 2015 y 2017, respectivamente, tras realizar grandes aportaciones al desarrollo y conceptualización del derecho penal internacional²⁵¹. Sin embargo, recibieron

²⁴³ Resolución 955 (1994) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 8 de noviembre de 1994. S/RES/955. Disponible en [https://undocs.org/pdf?symbol=es/S/RES/955%20\(1994\)](https://undocs.org/pdf?symbol=es/S/RES/955%20(1994))

²⁴⁴ CARPIO DELGADO, J., *Las víctimas ante los tribunales penales internacionales ad hoc* [libro electrónico], Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 39-40 [consultado el 3 de mayo de 2020]. Disponible en <https://biblioteca-tirant-com.cuarzo.unizar.es:9443/cloudLibrary/ebook/show/9788499850993>

²⁴⁵ JIMÉNEZ PIERNAS, C. (dir.), *Introducción al Derecho Internacional Público. Práctica de España y de la Unión Europea*, Tecnos, Madrid, 2011, p. 416.

²⁴⁶ Artículos 2 a 5 del Estatuto del TPIY y artículos 2 a 4 del Estatuto del TPIR.

²⁴⁷ Artículo 9.2 del Estatuto del TPIY y artículo 8.2 del Estatuto del TPIR, que establecen que los Estados deben cooperar con los tribunales internacionales e inhibirse en caso de concurrencia de jurisdicciones.

²⁴⁸ En los párrafos 7º y 8º de la Resolución 1503 (2003) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 28 de agosto de 2003. S/RES/1503. Disponible en [https://undocs.org/es/S/RES/1503%20\(2003\)](https://undocs.org/es/S/RES/1503%20(2003))

²⁴⁹ CARPIO DELGADO, J., *op. cit.*, p. 72.

²⁵⁰ Entre ellos, Radovan Karadzic y Ratko Mladic, líderes serbobosnios; o el ex primer ministro ruandés, Jean Kambanda. El expresidente serbio Slobodan Milosevic murió en 2006, cuando estaba bajo custodia del TPIY.

²⁵¹ Especialmente, los pronunciamientos del TPIR contribuyeron a la definición del crimen de genocidio determinando qué actos se engloban dentro de este tipo delictivo. IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, p. 610.

abundantes críticas por su ineficacia²⁵², su elevado coste y su desconexión de los problemas reales de la comunidad local, ya que estaban formados exclusivamente por personal extranjero y sus sedes estaban ubicadas un lugar apartado del de producción de los hechos²⁵³, lo que despertaba en las víctimas un sentimiento de abandono y desamparo²⁵⁴.

Sus objetivos eran evitar la impunidad y disuadir de la comisión de nuevos delitos, pero no estaban dirigidos a compensar a las víctimas, pues su función era esencialmente retributiva²⁵⁵. Con carácter general, las víctimas²⁵⁶ no tenían derecho a participar en el proceso, a ser oídas por el tribunal ni a ser informadas sobre el avance de las actuaciones²⁵⁷; su única posibilidad de intervención era como testigo y a petición de parte, quedando al margen del enjuiciamiento de un suceso del que habían sido las tristes protagonistas, relegadas a un papel instrumental, convertidas en herramientas para incriminar al acusado²⁵⁸. Así, la víctima solo era tenida en cuenta en la medida en que desempeñaba el papel de testigo²⁵⁹, por lo que los Estatutos y las Reglas de Procedimiento y Prueba de ambos tribunales *ad hoc* recogen una concepción de víctima-testigo²⁶⁰.

Los Estatutos prevén un régimen de protección de las víctimas frente a las posibles represalias de que pudiera ser objeto por prestar testimonio²⁶¹, que se deriva de la mención genérica en los artículos 19.1 del Estatuto del TPIR y 20.1 del Estatuto del TPIY²⁶². En las Reglas de Procedimiento y Prueba (RPP) de ambos tribunales²⁶³ se adoptan medidas

²⁵² Tras su constitución se continuaron sucediendo las violaciones de derechos humanos, siendo el ejemplo más significativo la matanza de Srebrenica (Bosnia-Herzegovina) en 1995. CARPIO DELGADO, J., *op. cit.*, p. 45.

²⁵³ El TPIY fue instalado en La Haya (Países Bajos) y el TPIR en Arusha (Tanzania).

²⁵⁴ *Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos* (S/2004/616), 3 de agosto de 2004, párrafos 42 y 44; también en IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, p. 612.

²⁵⁵ CARPIO DELGADO, J., *op. cit.*, pp. 46-47.

²⁵⁶ Las Reglas de Procedimiento y Prueba de ambos tribunales definían la noción de víctima en su Regla nº2: «Persona contra la que presuntamente se ha cometido un delito sobre el cual el tribunal tiene jurisdicción».

²⁵⁷ *Los derechos de las víctimas ante la Corte Penal Internacional: manual para víctimas, sus representantes legales y ONG* [recurso electrónico], Federación Internacional por los Derechos Humanos, 2007 [consultado el 1 de mayo de 2020], p. 26.

²⁵⁸ ORIHUELA CALATAYUD, E., *Las víctimas y la Corte Penal Internacional*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, p. 27. También se recoge esta idea en CARPIO DELGADO, J., *op. cit.*, p. 74.

²⁵⁹ CARPIO DELGADO, J., *ibíd.*, p. 185.

²⁶⁰ CARPIO DELGADO, J., *ibíd.*, p. 163.

²⁶¹ CARPIO DELGADO, J., *ibíd.*, pp. 162 y 164.

²⁶² En ambos preceptos se aboga por un proceso justo, «con pleno respeto de los derechos del acusado y con la debida consideración a las víctimas».

²⁶³ En cumplimiento del mandato de los artículos 21 del Estatuto del TPIR y 22 del Estatuto del TPIY.

de protección como la creación de una Dependencia de Víctimas y Testigos (regla nº 34), la detención provisional del sospechoso (regla nº 40), la preservación de la identidad del testigo hasta que se encuentre bajo la protección del tribunal (regla nº 69), la celebración de audiencias a puerta cerrada (regla nº 79) o cualquier otra medida que el tribunal juzgase conveniente (regla nº 75). Todas estas acciones tienen, en último término, el objetivo de evitar cualquier riesgo para la seguridad de las víctimas, defender su dignidad y privacidad y evitar la provocación de un trauma por prestar testimonio²⁶⁴.

Por otro lado, la normativa de ambos tribunales contiene ciertas medidas de reparación, pero resultan insuficientes²⁶⁵; aparte de algunas disposiciones sobre restitución de la propiedad²⁶⁶, la única referencia a la compensación de las víctimas se recoge en la regla nº 106 de las RPP de los dos tribunales, que permitía a la víctima solicitar una indemnización por los daños sufridos, pero se remite a las autoridades estatales, que serían las responsables de concederla²⁶⁷.

5.2.Los tribunales mixtos e híbridos: especial mención al caso de Kosovo

Dadas las numerosas críticas recibidas por los tribunales *ad hoc*, se implementó un nuevo modelo de jurisdicción penal internacional con la intención de corregir sus deficiencias: los tribunales mixtos o híbridos²⁶⁸. Al igual que sus predecesores, estos órganos jurisdiccionales no tienen un carácter permanente, sino que son creados con un mandato limitado para abordar situaciones particulares de graves violaciones del derecho internacional humanitario en un territorio y durante un período concreto. Sin embargo, su creación tiene una base jurídica distinta, pues proviene de un acuerdo bilateral entre la ONU y un gobierno estatal²⁶⁹, lo que los dota de un mayor grado de legitimidad a ojos de la población local; además, se componen de miembros nacionales e internacionales,

²⁶⁴ CARPIO DELGADO, J., *op. cit.*, p. 165.

²⁶⁵ *Los derechos de las víctimas ante la Corte Penal Internacional: manual para víctimas, sus representantes legales y ONG* [recurso electrónico], Federación Internacional por los Derechos Humanos, 2007 [consultado el 1 de mayo de 2020], p. 29.

²⁶⁶ Artículo 24.3 del Estatuto del TPIY y artículo 23.3 del Estatuto del TPIR.

²⁶⁷ GAMARRA CHOPO, Y., «Peace with justice: the role of prosecution in peacemaking and reconciliation», en *Revista Electrónica de Estudios Internacionales* [revista electrónica], n. 13, 2007 [consultado el 15 de febrero de 2020], p. 22; esta idea también se recoge en CARPIO DELGADO, J., *op. cit.*, p. 275.

²⁶⁸ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *Justicia Transicional y Comisiones de la Verdad*, 2ª ed., Berg Institute, Madrid, 2017, p. 612.

²⁶⁹ JIMÉNEZ PIERNAS, C., *op. cit.*, p. 417.

aplican disposiciones de derecho interno e internacional, y su sede se encuentra en el lugar de producción de los hechos²⁷⁰.

Este planteamiento estructural, basado en la combinación de la apertura hacia la comunidad internacional y el acercamiento a la sociedad afectada, suponen un salto cualitativo con respecto a los tribunales *ad hoc*, que da lugar a importantes avances, promoviendo la incorporación al ordenamiento interno de normas sobre derechos humanos, fortaleciendo el sistema judicial nacional con la actuación conjunta de jueces nacionales e internacionales y facilitando el acceso de las víctimas y la práctica de la prueba²⁷¹.

Con carácter general, los tribunales híbridos mantienen un enfoque punitivo de la justicia, por lo que las víctimas no tienen posibilidad de participación en el juicio en calidad de tales²⁷². El primero constituido en estos términos fue el **Tribunal Especial para Sierra Leona**, que surgió del acuerdo firmado entre el gobierno sierraleonés y la ONU el 16 de enero de 2002, con el mandato de enjuiciar los crímenes más graves cometidos durante la reciente guerra civil. Con respecto a las víctimas, su normativa no contenía disposiciones relativas a su participación en el proceso ni a la obtención de reparaciones, ya que sus Reglas de Procedimiento y Prueba fueron adaptadas a partir de las que regían el TPIY y el TPIR, por lo que solo se les tenía en consideración cuando actuaban como testigos²⁷³. En este sentido, se encomienda la asistencia, asesoría y protección de las víctimas-testigos a una Unidad de Víctimas y Testigos creada al efecto²⁷⁴.

Tras la experiencia del Tribunal Especial para Sierra Leona, que gozaba de independencia con respecto de la jurisdicción nacional para garantizar su imparcialidad²⁷⁵, surgen mecanismos con mayor implicación en la estructura estatal, mediante la creación de unidades penales internacionalizadas dentro del sistema judicial

²⁷⁰ *Los derechos de las víctimas ante la Corte Penal Internacional: manual para víctimas, sus representantes legales y ONG* [recurso electrónico], Federación Internacional por los Derechos Humanos, 2007 [consultado el 1 de mayo de 2020], p. 30.

²⁷¹ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, p. 613.

²⁷² ORIHUELA CALATAYUD, E., *Las víctimas y la Corte Penal Internacional*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, p. 27.

²⁷³ *Los derechos de las víctimas ante la Corte Penal Internacional: manual para víctimas, sus representantes legales y ONG* [recurso electrónico], Federación Internacional por los Derechos Humanos, 2007 [consultado el 1 de mayo de 2020], p. 31.

²⁷⁴ Regla nº 34, en desarrollo del mandato del artículo 16.4 del Estatuto de la Corte.

²⁷⁵ Así lo establecía el artículo 8 de su Estatuto.

nacional. Esto facilita su implementación al servirse de recursos e infraestructuras ya existentes, refuerza el sistema judicial nacional con la introducción de jueces internacionales formados en derechos humanos e impide las injerencias políticas y la corrupción, restableciendo la confianza de los ciudadanos en sus propias instituciones²⁷⁶.

Siguiendo este modelo se constituyeron las **Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya**, los **Paneles Especiales para Crímenes Graves en Timor Leste** o los **Paneles Internacionalizados de Kosovo**²⁷⁷.

En el caso de Kosovo, en 1999 el Consejo de Seguridad estableció la MINUK²⁷⁸ para poner al territorio bajo administración internacional provisional al finalizar el conflicto kosovar. En esta fase de transición, la MINUK asumió la autoridad ejecutiva, legislativa y judicial, y decidió adoptar un enfoque mixto para abordar el enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante el conflicto, creando paneles especiales que involucran a jueces internacionales dentro de la estructura judicial nacional²⁷⁹, para garantizar su independencia ante el alto riesgo de injerencia política existente²⁸⁰. Los derechos de las víctimas en los procesos penales emprendidos ante estas Salas se regían por las leyes kosovares recientemente adoptadas de forma provisional, que reflejaban fuertes influencias del derecho internacional humanitario, por lo que les brindan una atención satisfactoria (participación en el procedimiento, derecho a información, protección de su privacidad...)²⁸¹.

Con la independencia de Kosovo en 2008, la situación da un vuelco. En 2015, el Tribunal Especial para Kosovo recoge el testigo en la lucha contra la impunidad de los crímenes en el conflicto kosovar. Aunque fue creado por una Ley del Parlamento

²⁷⁶ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, p. 616-617.

²⁷⁷ *Los derechos de las víctimas ante la Corte Penal Internacional: manual para víctimas, sus representantes legales y ONG* [recurso electrónico], Federación Internacional por los Derechos Humanos, 2007 [consultado el 1 de mayo de 2020], pp. 35-36.

²⁷⁸ Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo, también conocida como UNMIK por sus siglas en inglés. Fue creada por la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad (S/RES/1244), de 10 de junio de 1999.

²⁷⁹ A través de las Resoluciones de la MINUK nº 2006/6, de 15 de febrero de 2000 (UNMIK/REG/2000/6), y 2000/64, de 15 de diciembre de 2000 (UNMIK/REG/2000/64); extraído de IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, p. 618.

²⁸⁰ OLÁSULO ALONSO, H. et al. (coord.), *Alcance y limitaciones de la justicia internacional*, Vol. IV [libro electrónico], Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 586-588 [consultado 6 de mayo de 2020]. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=729517>

²⁸¹ *Los derechos de las víctimas ante la Corte Penal Internacional: manual para víctimas, sus representantes legales y ONG* [recurso electrónico], Federación Internacional por los Derechos Humanos, 2007 [consultado el 1 de mayo de 2020], p. 36.

kosovar²⁸², tiene naturaleza híbrida por estar situado en La Haya y componerse exclusivamente por magistrados internacionales, con la intención de garantizar su imparcialidad y proteger sus investigaciones. Está integrado en el sistema judicial kosovar, pero tiene un mandato temporal y goza de una importante autonomía y de primacía sobre el resto de tribunales nacionales en las materias sobre las que tiene competencia, es decir, crímenes de trascendencia internacional (sobre todo crímenes de guerra y de lesa humanidad) y otros tipificados como graves en la legislación interna²⁸³.

El Tribunal Especial, plenamente operativo desde 2017, aunque es acusado de alejarse de las víctimas por su ubicación en el extranjero y su falta de personal local, cuenta con una Oficina para la Participación de las Víctimas²⁸⁴; además, su ley de creación recoge un régimen de protección de víctimas y testigos (artículo 23) y un elenco de sus derechos ante la Corte, que incluyen la información y la reparación (artículo 22).

5.3.El papel de la Corte Penal Internacional en el amparo de los derechos de las víctimas

El intenso desarrollo que ha experimentado el derecho penal internacional en las últimas décadas alcanzó su punto álgido en 1998 con la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), fruto de la cooperación judicial institucionalizada en la lucha contra la impunidad. La idea de una jurisdicción penal centralizada con alcance internacional que supliera los grandes problemas de la jurisdicción universal sonó con fuerza tras la Segunda Guerra Mundial²⁸⁵, pero no se materializaría hasta 1994, cuando la Comisión de Derecho Internacional (CDI) presentó ante la AGNU su Proyecto de Estatuto para una Corte Penal Internacional²⁸⁶. Este proyecto constituyó la base de trabajo de la Conferencia Internacional de Plenipotenciarios que tuvo lugar en Roma en 1998 y que, tras intensos debates y negociaciones, aprobó el definitivo Estatuto de la Corte Penal

²⁸² Ley de la República de Kosovo nº 5/L-053, de 3 de agosto de 2015, de las Cámaras y la Fiscalía Especiales. Disponible en <https://www.scp-ks.org/en/documents/law-specialist-chambers-and-specialist-prosecutors-office>

²⁸³ OLÁSULO ALONSO, H. et al. (coord.), *op. cit.*, p. 591.

²⁸⁴ Artículo 24.1.b) de la Ley nº 5/L-053.

²⁸⁵ OLÁSULO ALONSO, H. et al. (coord.), *op. cit.*, p. 396.

²⁸⁶ La AGNU había encomendado esta tarea a la CDI en su Resolución 39/44, de 4 de diciembre de 1989, disponible en <https://undocs.org/es/A/RES/44/39>

Internacional²⁸⁷, que contenía 128 artículos sobre cuestiones de procedimiento, organización, competencias y derecho aplicable, y entró en vigor el 1 de julio de 2002²⁸⁸.

La CDI consideró que un tratado multilateral era la forma más idónea para abordar la creación de una institución que pretendía ser independiente y objetiva; sin embargo, esta decisión conllevó el fracaso en el intento de universalizar la justicia penal de manera definitiva, pues se pueden constatar ausencias relevantes: Estados Unidos, China, Rusia o Israel no se encuentran entre los 123 Estados que hasta el momento han ratificado el Estatuto de Roma²⁸⁹. España prestó su consentimiento a la adhesión con la aprobación de la LO 6/2000, de 4 de octubre, aceptando la jurisdicción de la CPI y obligándose a cooperar con ella.

La CPI, situada en La Haya, es el primer tribunal penal internacional constituido de forma permanente para depurar responsabilidades individuales²⁹⁰. Su competencia material se extiende sobre los crímenes más graves de trascendencia internacional, en los términos en que han sido tipificados en los artículos 5 a 8 de su Estatuto: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y agresión²⁹¹. Aunque es un organismo independiente, está vinculada a la ONU mediante un acuerdo de relación²⁹², lo que refleja su vocación universal; sin embargo, solo puede ejercer su jurisdicción sobre crímenes cometidos en el territorio de Estados partes en el Estatuto de la CPI o por sus nacionales (artículo 12.1 del Estatuto), o si un Estado que no es parte del Estatuto acepta su jurisdicción para un asunto concreto mediante declaración especial (artículo 12.3). El procedimiento se iniciará cuando el Estado en cuestión remita un asunto a la Corte, cuando el Fiscal emprenda una investigación de oficio o cuando lo solicite el Consejo de

²⁸⁷ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, p. 628.

²⁸⁸ JIMÉNEZ PIERNAS, C., *op. cit.*, pp. 417-418.

²⁸⁹ OLÁSULO ALONSO, H. et al. (coord.), *op. cit.*, p. 397.

²⁹⁰ Las instancias penales supranacionales preexistentes a la CPI, como el TEDH o la Corte IDH en ámbitos regionales, tienen competencia para enjuiciar a los Estados que incurren en responsabilidad internacional por el incumplimiento de normas de derechos humanos. OLÁSULO ALONSO, H. et al. (coord.), *op. cit.*, p. 71; también SORIANO RODRÍGUEZ, M., *op. cit.*, p. 323-324.

²⁹¹ JIMÉNEZ PIERNAS, C., *op. cit.*, p. 461.

²⁹² Este acuerdo de relación, suscrito sobre la base del artículo 2 del Estatuto de Roma, está disponible en https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Publications/Compendium/Compendium.3rd.03.SPA.pdf

Seguridad²⁹³ (artículo 13); en este último caso, no es necesario que el Estado involucrado sea miembro del Estatuto de Roma²⁹⁴.

El objetivo de la CPI no es el de suplantar el papel de las jurisdicciones nacionales, sino complementarlas como una última instancia para reducir espacios de impunidad²⁹⁵. La relación entre las jurisdicciones nacionales y la CPI se rige por el principio de complementariedad, según se deriva del Preámbulo (párrafo 10) y del artículo 1 del Estatuto de la CPI; por tanto, al contrario que en anteriores tribunales internacionales, son los tribunales estatales quienes tienen primacía sobre la CPI en el enjuiciamiento de crímenes internacionales cometidos en su territorio²⁹⁶. Hasta la creación de la CPI, las violaciones del derecho penal internacional se sancionaban de forma descentralizada, a través de las distintas jurisdicciones nacionales²⁹⁷, que continuaban desempeñando un papel prioritario, ya que la CPI funciona como una jurisdicción subsidiaria, y solo interviene en caso de inactividad de los tribunales internos²⁹⁸.

Siguiendo esta lógica, el artículo 17 del Estatuto de Roma impide a la CPI enjuiciar a una persona que ya ha sido o está siendo procesada por un tribunal nacional, o haya iniciado una investigación y haya decidido no incoar acciones penales, siempre que esta decisión no se deba a la falta de disposición (artículo 17.2) o de capacidad (artículo 17.3) para sustanciar un proceso con las debidas garantías. En este caso, la CPI deberá examinar el asunto; si aprecia incorrecciones similares en la instrucción de un proceso ya concluido, podrá revocar la sentencia y su valor de cosa juzgada (artículo 20.3)²⁹⁹.

Esta posición preferente de la jurisdicción interna se ve potenciada por las limitaciones de la CPI, que por su naturaleza solo puede conocer de crímenes cometidos con posterioridad a la entrada en vigor de su Estatuto (límite temporal), en relación con

²⁹³ El Consejo de Seguridad ha hecho uso de esta facultad en dos ocasiones, remitiendo a la Fiscalía de la CPI el conflicto de Darfur, en Sudán (Resolución 1593, de 31 de marzo de 2005); y la crisis de Libia (Resolución 1970, de 26 de febrero de 2011).

²⁹⁴ OLÁSOLO ALONSO, H. et al. (coord.), *op. cit.*, pp. 436-443.

²⁹⁵ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 634-635.

²⁹⁶ PHILIPPE, X., «Los principios de jurisdicción universal y complementariedad: su interconexión», en *International Review of the Red Cross* [revista electrónica], n. 862, 2006, pp. 7-8 [consultado 22 de marzo de 2020]. Disponible en https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/irrc_862_philippe.pdf

²⁹⁷ ORIHUELA CALATAYUD, E., «Aplicación del Derecho Internacional Humanitario por las jurisdicciones nacionales», en *Creación de una jurisdicción penal internacional*, Colección Escuela Diplomática nº 4. AEPDIRI. BOE, Madrid, 2000, pp. 239-240.

²⁹⁸ PUEYO LOSA, J., «El principio de jurisdicción universal y el Estatuto de la Corte Penal Internacional», en *El derecho internacional humanitario ante los retos de los conflictos armados actuales*, Rodríguez-Villasante y Prieto (coord.), Marcial Pons, Madrid y Barcelona, 2006, p. 195.

²⁹⁹ OLÁSOLO ALONSO, H. et al. (coord.), *op. cit.*, p. 398; IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, pp. 631-632.

los Estados partes (límite espacial), y cuando se trate de actos subsumibles en los tipos penales recogidos en su Estatuto (límite material). Por tanto, en los casos que escapen a la jurisdicción de la CPI, la actuación de los tribunales estatales será la única barrera contra la impunidad. No obstante, la ventaja de la CPI es que ante ella no podrá invocarse ningún tipo de inmunidad personal (artículo 27 del Estatuto), ni una amnistía, ni la prescripción de los delitos, que tienen naturaleza imprescriptible (artículo 29)³⁰⁰.

La actividad de la CPI ha sido escasa en sus primeros años de funcionamiento, pero ha acometido procesos de gran relevancia; uno de ellos es el de Omar Al-Bashir, hoy ex presidente de Sudán, que fue el primer jefe de Estado en activo en ser acusado por la CPI, que emitió sendas órdenes de arresto contra él en 2009, 2010 y 2017 por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. Sin embargo, su caso también ejemplifica las reticencias de los Estados miembros del Estatuto de Roma a colaborar con la Corte, lo que obstaculiza su labor: ninguno de los países que visitó con posterioridad a la emisión de su orden de arresto decidió detener a Al-Bashir para entregarlo a la CPI³⁰¹.

Otro caso importante es el de Thomas Lubanga, que fue el primero en el que la Corte dictó sentencia condenatoria, considerándolo culpable en 2012 de crímenes de guerra en la República Democrática del Congo; su condena conllevó la emisión de una orden de reparación a las víctimas, sentando un precedente esperanzador en la compensación de las víctimas y la protección de sus derechos³⁰².

La adopción del Estatuto de la CPI (y de sus RPP³⁰³) supuso un salto cualitativo en la consideración de la figura de la víctima en el enjuiciamiento de crímenes internacionales, mostrando un fuerte compromiso con su situación a través del reconocimiento de un amplio elenco de derechos. A diferencia de la concepción utilitarista sostenida en experiencias previas como los tribunales *ad hoc*, ante los cuales la víctima solo podía comparecer en calidad de testigo, la CPI le otorga un papel protagonista, amplía sus posibilidades de actuación y adopta una postura cercana a la justicia restaurativa³⁰⁴.

³⁰⁰ JIMÉNEZ PIERNAS, C., *op. cit.*, p. 418.

³⁰¹ OLÁSOLO ALONSO, H. et al. (coord.), *op. cit.*, pp. 399, 403-404 y 418.

³⁰² ORIHUELA CALATAYUD, E., *Las víctimas y la Corte Penal Internacional*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014, p. 109.

³⁰³ Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, adoptadas por la Comisión Preparatoria para la Corte Penal Internacional, PCNICC/2000/INF/Add. 1, 12 de julio de 2000.

³⁰⁴ ORIHUELA CALATAYUD, E., *ibíd.*, p. 21.

En reflejo del profundo desarrollo que ha experimentado el derecho penal internacional en los últimos años, se diseña una política de trato favorable a las víctimas³⁰⁵, cuyo eje central es la concesión del estatus de participante activo en el procedimiento, permitiéndole defender sus propios intereses ante la Corte y ser escuchado por la Sala³⁰⁶. Además, toda víctima tendrá derecho a ser informada del avance del proceso, a ser objeto de asistencia y protección y a obtener una reparación por su sufrimiento³⁰⁷.

En virtud de la regla n° 85 de las RPP, la condición de víctima se reconocerá a «las personas naturales que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de algún crimen de la competencia de la Corte»³⁰⁸. Aquellos que se incluyan en esta definición podrán acceder a reparaciones, ser asistidos y protegidos por los órganos de la Corte y, si presentan la solicitud correspondiente en los términos de la regla n° 89, participar directamente en el procedimiento³⁰⁹. Estos derechos también se extienden a las víctimas indirectas³¹⁰ y, por la naturaleza de estos crímenes, el colectivo de víctimas siempre se masifica, lo que ralentiza los procedimientos³¹¹.

En la estructura de la CPI existen varios órganos al servicio de las víctimas: la Sección de Participación y Reparación de las Víctimas, que realiza tareas de asesoramiento e información sobre el funcionamiento de la CPI y cómo ejercitar sus derechos ante ella; la Dependencia de Víctimas y Testigos, que se encarga de asistir a las víctimas en la prestación de testimonio y de proporcionarles protección; pero la principal labor de apoyo y asistencia la desarrolla la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, que constituye el centro neurálgico de participación de las víctimas ante la Corte, y puede proporcionarles

³⁰⁵ *Informe de la Corte sobre la estrategia en relación con las víctimas*, de 10 de noviembre de 2009 (ICC-ASP/8/45). El marco estatutario está en continuo desarrollo, por lo que en 2012 la CPI elabora una *Estrategia revisada en relación con las víctimas* (ICC-ASP/11/38).

³⁰⁶ ORIHUELA CALATAYUD, E., *op. cit.*, pp. 26 y 193.

³⁰⁷ ORIHUELA CALATAYUD, E., *op. cit.*, pp. 31 y 35.

³⁰⁸ Además, la Regla n° 85 también recoge una innovadora consideración de víctima a personas jurídicas, pero restringida a aquellas que hayan sufrido un daño directo en bienes materiales cuyos fines sean filantrópicos (educativos, científicos, religiosos...). ORIHUELA CALATAYUD, E., *op. cit.*, pp. 72-89.

³⁰⁹ *Los derechos de las víctimas ante la Corte Penal Internacional: manual para víctimas, sus representantes legales y ONG* [recurso electrónico], Federación Internacional por los Derechos Humanos, 2007 [consultado el 1 de mayo de 2020], p. 39.

³¹⁰ Así lo ha confirmado la CPI en su Sentencia de 11 de julio de 2008, relativa a la participación de las víctimas en el asunto Lubanga. ICC-01/04-423-Corr., párrafo 28.

³¹¹ ORIHUELA CALATAYUD, E., *op. cit.*, pp. 112-114.

representación legal si fuera necesario, ya que algunos derechos solo pueden ejercitarse a través del representante legal (reglas n° 90 y 91)³¹².

Para evitar que la falta de protección disuada a las víctimas de participar ante la Corte, se les debe proporcionar un entorno de seguridad a través de la Dependencia de Víctimas y Testigos, según prevé el artículo 43.6 del Estatuto³¹³. Las Salas acordarán las medidas necesarias para la protección de las víctimas que comparezcan ante ellas (celebrar audiencias a puerta cerrada, permitir el testimonio telemático, impedir la divulgación de su identidad...) (regla n° 87) o incluso medidas especiales para facilitar el testimonio de personas traumatizadas, niños o aquellos que hayan sufrido violencia sexual (regla n° 88). Sin embargo, también deberán implantarse medidas de protección previas y posteriores a su participación, puesto que el testimonio prestado o la disposición de la víctima a testificar puede poner en riesgo su vida y la de sus familiares³¹⁴.

El régimen general de participación de las víctimas en los procedimientos de la CPI se desarrollará conforme al artículo 68.3 del Estatuto de Roma; es decir, podrán ejercer este derecho cuando se vean afectados sus intereses personales, siempre que se respeten los derechos procesales del acusado y se garantice un juicio justo. No obstante, ni el Estatuto ni las RPP recogen un elenco de derechos y posibilidades de actuación de las víctimas y sus representantes legales, por lo que su estatuto jurídico ha sido desarrollado por las diferentes Salas, haciendo uso del poder que les confiere el artículo 68.3³¹⁵.

Con carácter general, se reconoce a las víctimas una serie de derechos procesales derivados del mero reconocimiento de su condición de tales y de la autorización genérica a participar, como consultar el expediente de las actuaciones (regla n° 121.10), recibir notificaciones sobre las decisiones de la Sala (regla n° 92.6) o asistir y participar en las audiencias a través de sus representantes legales (regla n° 91.2), que podrán formular alegatos iniciales y finales (regla n° 89.1), especialmente en la audiencia de confirmación de cargos, que es uno de los momentos clave para la participación de las víctimas en la fase preliminar³¹⁶.

³¹² ORIHUELA CALATAYUD, E., *op. cit.*, pp. 43-51.

³¹³ IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *op. cit.*, p. 627.

³¹⁴ ORIHUELA CALATAYUD, E., *op. cit.*, pp. 57-69.

³¹⁵ *Ibíd.*, pp. 41 y 151-155.

³¹⁶ *Ibíd.*, pp. 155-158 y 165-166.

Además, la Sala puede ampliar el estatuto jurídico de la víctima a través del reconocimiento de derechos adicionales, que están sujetos a autorización específica y exigen una valoración caso por caso: exponer sus observaciones (regla nº 93), acceder a información calificada como confidencial en el expediente, plantear cuestiones a los testigos (regla nº 91.3) o presentar pruebas, incluido su propio testimonio³¹⁷.

El Estatuto de la CPI también prevé tres regímenes especiales de participación de las víctimas en los que la afección de sus intereses es directa³¹⁸: presentar observaciones a la solicitud del Fiscal para abrir una investigación (artículo 15.3), en cuestiones sobre la competencia de la Corte o la admisibilidad de la causa (artículo 19.3) y en materia de reparación, que podrá incluir acciones de restitución, indemnización y rehabilitación médica y psicológica de los afectados (artículo 75).

Como elemento clave en la reparación de las víctimas, existe un Fondo Fiduciario en beneficio de las víctimas, previsto en el artículo 79 del Estatuto de la CPI y desarrollado en la regla nº 98 de sus RPP. A través de este Fondo se canalizan las indemnizaciones ordenadas por la Corte, pues permite facilitar el pago, especialmente cuando el número de víctimas que deben percibirlas es elevado. El Fondo también puede recibir donaciones o contribuciones voluntarias para proporcionar asistencia adicional a las víctimas, por lo que desempeña un papel esencial en la dimensión restaurativa de la CPI.

La CPI constituye un foro que, a pesar de su importante función retributiva, representa un paso significativo en la compensación de las víctimas de crímenes internacionales, garantizándoles protección y asistencia y haciendo efectivos dos de sus derechos más esenciales, la justicia y la reparación³¹⁹.

6. Conclusiones

Es evidente que la sensibilización universal por las víctimas de los crímenes más graves de trascendencia internacional ha aumentado exponencialmente en las últimas décadas, de la mano de una conciencia internacional que también ha potenciado una profunda evolución del derecho penal internacional. En la configuración de esta conciencia social han desempeñado un importante papel las ONG, las asociaciones de

³¹⁷ *Ibíd.*, pp. 158-160 y 166-176.

³¹⁸ *Ibíd.*, pp. 189-194; sobre la reparación, OLÁSOLO ALONSO, H. et al. (coord.), *op. cit.*, pp. 417.

³¹⁹ ORIHUELA CALATAYUD, E., *op. cit.*, pp. 195-198.

derechos humanos e, incluso, los medios de comunicación, que han ejercido presión sobre las autoridades estatales para reivindicar la implantación de medidas de compensación de las violaciones de derechos humanos.

No solo se ha extendido el alcance de los tradicionales órganos jurisdiccionales de justicia en la lucha contra la impunidad de los crímenes de esta entidad, sino que también se han ampliado los derechos procesales de las víctimas y sus posibilidades de actuación. Este cambio se puede apreciar en los perceptibles avances desde el limitado estatuto jurídico de las víctimas ante los primeros tribunales internacionales, los tribunales *ad hoc*, hasta su papel protagonista ante la CPI, que pone de manifiesto el proceso de humanización que ha atravesado (y sigue atravesando) la justicia internacional y que se ha reflejado, asimismo, en los ordenamientos estatales.

Una mejora relevante ha sido la irrupción en el contexto comparado de modelos de justicia restaurativa, como las comisiones de la verdad, que ofrecen a las víctimas un modo de aliviar su sufrimiento y satisfacer derechos que no podrían hacerse efectivos ante los órganos jurisdiccionales, que siguen centrados en una perspectiva retributiva dirigida a la sanción de los responsables, lo cual deja un reducido margen para la participación de los agraviados.

Este desarrollo ha podido llevarse a la práctica gracias a la cooperación internacional, que ha resultado imprescindible para configurar una red transnacional de protección de los derechos humanos, reduciendo los espacios globales de impunidad y tratando de garantizar que las víctimas de los abusos siempre tengan a su disposición mecanismos para hacer efectivos sus derechos esenciales a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de hechos similares.

En este sentido, el Estatuto de Roma de 1998 marcó un hito en la lucha contra la impunidad de las violaciones de los derechos humanos, no solo porque constituyó una Corte Penal Internacional con vocación universal, algo que habría resultado utópico unas décadas antes por las reticencias de los Estados a aceptar lo que consideraban injerencias de la comunidad internacional en sus asuntos internos; sino también porque fomentó la incorporación de disposiciones de tutela de los derechos humanos al derecho interno de los Estados que se adhirieron a él. Las limitaciones de la incipiente CPI evidencian la exigencia de complementarse con las jurisdicciones estatales, que deberán mantener un

papel prioritario en el enjuiciamiento; esta relevancia, unida a la debilidad que suelen presentar los mecanismos judiciales internos en contextos de justicia transicional, hacen necesario fortalecer y dotar de contenido el principio de jurisdicción universal.

En los últimos tiempos se han producido grandes avances en los distintos modos de compensación de las víctimas de los crímenes internacionales de mayor entidad; no obstante, la justicia de las víctimas todavía tiene importantes desafíos por delante, como la implantación de diferentes mecanismos preventivos, para no limitarse a actuar *a posteriori* mediante mecanismos represivos.

Hoy en día se sigue buscando el modo más apropiado para hacer efectivos los derechos de las víctimas de las más graves violaciones de derechos humanos, y así permitirles superar sus sufrimientos. Existen instrumentos efectivos para reivindicarlos, pero la experiencia ha demostrado que uno solo de estos mecanismos no puede satisfacer todos los derechos de los agraviados; el camino más correcto parece la creación de una estrategia plural que incluya medios de diversa naturaleza para atender a las diferentes dimensiones de la compensación de las víctimas, promoviendo la colaboración entre ellos. La combinación de estos mecanismos, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, permitiría avanzar hacia una concepción global del ideal de justicia, no entendida únicamente como aplicación de la ley positiva sino en un sentido amplio, sensato y moral.

Bibliografía:

- CAPELLÀ I ROIG, M., «Los crímenes contra la humanidad en el caso Scilingo», en *Revista Electrónica de Estudios Internacionales* [revista electrónica], n. 10, 2005 [consultado 24 de abril de 2020]. Disponible en <http://www.reei.org/index.php/revista/num10/articulos/crimenes-contra-humanidad-caso-scilingo>
- CARPIO DELGADO, J., *Las víctimas ante los tribunales penales internacionales ad hoc* [libro electrónico], Tirant lo Blanch, Valencia, 2009 [consultado 3 de mayo de 2020]. Disponible en <https://biblioteca-tirant-com.cuarzo.unizar.es:9443/cloudLibrary/ebook/show/9788499850993>
- ESPINOZA CUEVAS, V. et. al., *Comisiones de verdad: ¿un camino incierto? Estudio comparativo de comisiones de la verdad en Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala y Sudáfrica desde las víctimas y las organizaciones de derechos humanos* [libro electrónico], Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), Santiago de Chile, 2003 [consultado 2 de abril de 2020]. Disponible en https://www.aprt.ch/content/files_res/Estudio2.pdf
- GAMARRA CHOPO, Y., «Peace with justice: the role of prosecution in peacemaking and reconciliation», en *Revista Electrónica de Estudios Internacionales* [revista electrónica], n. 13, 2007 [consultado 15 de febrero de 2020]. Disponible en <http://www.reei.org/index.php/revista/num13/articulos/peace-with-justice-the-role-of-prosecution-in-peacemaking-and-reconciliation>
- GONZÁLEZ, E. y VARNEY, H., «¿Qué son las comisiones de la verdad?», en *En busca de la verdad: elementos para la creación de una comisión de la verdad eficaz* [libro electrónico], Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), Nueva York, 2013 [consultado 27 de febrero de 2020]. Disponible en <https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Book-Truth-Seeking-2013-Spanish.pdf>
- GÓMEZ MÉNDEZ, M. P., «Comisiones de verdad: ¿qué tanto aportan a la verdad, la justicia y la reconciliación?», en *OASIS* [revista electrónica], n. 11, Bogotá, 2005 [consultado 2 de marzo de 2020]. Disponible en: <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/oasis/article/view/2393>

- HAYNER, P. B., «Truth commissions: a schematic overview», en *International Review of the Red Cross* [revista electrónica], n. 862, 2006 [consultado 26 de febrero de 2020]. Disponible en <https://international-review.icrc.org/articles/truth-commissions-schematic-overview>

- HAYNER, P. B., *Verdades innombrables: el reto de las comisiones de la verdad* [libro electrónico], Fondo de Cultura Económica (FCE), México D.F., 2010 [consultado 8 de marzo de 2020]. Disponible en <https://ebookcentral.proquest.com/lib/unizarsp/reader.action?docID=4508625>

- IBÁÑEZ NAJAR, J. E., *Justicia Transicional y Comisiones de la Verdad*, 2ª ed., Berg Institute, Madrid, 2017.

- JIMÉNEZ PIERNAS, C. (dir.), *Introducción al Derecho Internacional Público. Práctica de España y de la Unión Europea*, Tecnos, Madrid, 2011.

- OLÁSOLO ALONSO, H. et al. (dir.), *Alcance y limitaciones de la justicia internacional*, Vol. IV [libro electrónico], Tirant lo Blanch, Valencia, 2018 [consultado 6 de mayo de 2020]. Disponible en <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=729517>

- OLLÉ SESÉ, M., *Justicia Universal para crímenes internacionales*, La Ley, Madrid, 2008.

- ORIHUELA CALATAYUD, E., «Aplicación del Derecho Internacional Humanitario por las jurisdicciones nacionales», en *Creación de una jurisdicción penal internacional*, Colección Escuela Diplomática nº 4. AEPPDIRI. BOE, Madrid, 2000.

- ORIHUELA CALATAYUD, E., «La obligación *aut dedere aut iudicare* y su cumplimiento en España», en *Revista Española de Derecho Internacional* [revista electrónica], Vol. LXVIII, 2, 2016, Madrid [consultado 4 de abril de 2020]. Disponible en <http://www.revista-redi.es/es/articulos/la-obligacion-aut-dedere-aut-iudicare-y-su-cumplimiento-en-espana/>

- ORIHUELA CALATAYUD, E., *Las víctimas y la Corte Penal Internacional*, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2014.

- PÉREZ CEPEDA, A. (dir.), *El principio de justicia universal: fundamentos y límites* [libro electrónico], Tirant lo Blanch, Valencia, 2012 [consultado 20 de abril de 2020]. Disponible en <https://biblioteca-tirant-com.cuarzo.unizar.es:9443/cloudLibrary/ebook/show/9788490047828#ulNotainformativaTitle>

- PHILIPPE, X., «Los principios de jurisdicción universal y complementariedad: su interconexión», en *International Review of the Red Cross* [revista electrónica], n. 862, 2006 [consultado 22 de marzo de 2020]. Disponible en https://www.icrc.org/es/doc/assets/files/other/irrc_862_philippe.pdf

- PIGRAU SOLÉ, A., *La jurisdicción universal y su aplicación en España*, Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans, Barcelona, 2009.

- PUEYO LOSA, J., «El principio de jurisdicción universal y el Estatuto de la Corte Penal Internacional», en *El derecho internacional humanitario ante los retos de los conflictos armados actuales*, Rodríguez-Villasante y Prieto (coord.), Marcial Pons, Madrid y Barcelona, 2006.

- ROBLES CARRILLO, M., “El principio de jurisdicción universal: estado actual y perspectivas de evolución”, en *Revista Electrónica de Derecho Internacional (AEDPDIRI)* [revista electrónica], LXVI, 2014, [consultado 9 de abril de 2020]. Disponible en <http://www.revista-redi.es/es/articulos/el-principio-de-jurisdiccion-universal-estado-actual-y-perspectivas-de-evolucion/>

- SÁNCHEZ LEGIDO, A., «El fin del modelo español de jurisdicción universal», en *Revista Electrónica de Estudios Internacionales* [revista electrónica], nº 27, 2014 [consultado 24 de abril de 2020]. Disponible en <http://www.reei.org/index.php/revista/num27/articulos/fin-modelo-espanol-jurisdiccion-universal>

- SORIANO RODRÍGUEZ, M., «El principio de jurisdicción universal y la reforma del art. 23.4 LOPJ, ¿un paso atrás en la lucha contra la impunidad?», en *Revista Digital Facultad de Derecho* [revista electrónica], nº 6, 2013 [consultado el 10 de abril de 2020]. Disponible en http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD%20DE%2

- TAMARIT SUMALLA, J., «Comisiones de la verdad y justicia penal en contextos de transición», en *InDret: Revista para el Análisis del Derecho*, nº 1 [revista electrónica], Barcelona, 2010 [consultado 22 de mayo de 2020], p. 7-11 y 24. Disponible en: <https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/694.pdf>
- VÁZQUEZ SERRANO, I., «La amnistía: un obstáculo al ejercicio de la jurisdicción universal sobre crímenes internacionales. El caso de España», en *Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho (CEFD)* [revista electrónica], nº 39, 2019 [consultado el 22 de abril de 2020]. Disponible en <https://ojs.uv.es/index.php/CEFD/article/view/13957>

Anexo legal:

- Constitución Española.
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
- Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional.
- Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.
- Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.
- Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.
- Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
- Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, por la que se autoriza la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional.

- Ley de la República de Kosovo n° 5/L-053, de 3 de agosto de 2015, de las Cámaras y la Fiscalía Especiales. Disponible en <https://www.scp-ks.org/en/documents/law-specialist-chambers-and-specialist-prosecutors-office>
- Ley de 16 de junio de 1993, relativa a la represión de las infracciones graves a las Convenciones de Ginebra de 1949 y a los Protocolos I y II de 1977 (Bélgica).
- Ley de 10 de febrero de 1999, relativa a la represión de las violaciones graves del Derecho internacional humanitario (Bélgica).
- Ley 23.492, de 23 de diciembre de 1986, Ley de Punto Final (Argentina).
- Ley 23.521, de 8 de junio de 1987, Ley de Obediencia Debida (Argentina).

Anexo jurisprudencial:

- Sentencia de la Audiencia Nacional núm. 16/2005, de 19 de abril.
- Sentencia del Tribunal Supremo núm. 327/2003, de 25 de febrero.
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 237/2005, de 26 de septiembre.
- Auto del Juzgado Central de Instrucción n° 5 de la Audiencia Nacional de 18 de noviembre de 2008 (ROJ: AAN 67/2008).
- Sentencia del Tribunal Supremo núm. 101/2012, de 27 de febrero.
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 140/2018, de 20 de diciembre.
- Auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 2 de febrero de 2009.
- Sentencia del Tribunal Supremo núm. 101/2012, de 27 de febrero.
- Sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el asunto *Bélgica vs. Senegal sobre cuestiones relativas a la obligación de procesar o extraditar* (asunto *Habré*), de 20 de julio de 2012.
- Sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el asunto *República Democrática del Congo vs. Bélgica sobre la orden de detención de 11 de abril de 2000* (asunto *Yerodia*), de 14 de febrero de 2002.

- Sentencia de la Corte Penal Internacional relativa a la participación de las víctimas en el asunto *Fiscal vs. Thomas Lubanga Dyilo*, 11 de julio de 2008. ICC-01/04-423-Corr.
- Sentencia de la Corte Penal Internacional en el caso *Fiscal vs. Thomas Lubanga Dyilo*, 10 de julio de 2012. ICC-01/04-01/06.
- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 26 de septiembre de 2006, en el *Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile*, Serie C, núm. 154. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf
- Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de marzo de 2001, en el caso *Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros vs. Perú)*, Serie C, núm. 75. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_75_esp.pdf

Resoluciones de organismos internacionales y convenios internacionales:

- Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Resolución número 217 A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1948. Disponible en: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
- Resolución número 60/147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005. Disponible en: <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx>
- Resolución número 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 3 de diciembre de 1973: Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad. Disponible en: <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/PersonsGuilty.aspx>
- Resolución número 39/44 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 4 de diciembre de 1989. A/RES/44/39. Disponible en <https://undocs.org/es/A/RES/44/39>
- Resolución número 47/133 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 18 de diciembre de 1992, por la que se aprueba la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Disponible en:

<https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1428.pdf?file=fileadmin/Documentos/BDL/2002/1428>

- Resolución número 2391 (XXIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 26 de noviembre de 1968, por la que se aprueba la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad. Disponible en: <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/WarCrimes.aspx>

- Resolución número 39/46 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1984, por la que se aprueba la Convención contra la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Disponible en: <https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx>

- Resolución sobre impunidad, número 2005/81, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Doc. ONU E/CN.4/RES/2005/8. 21 de abril de 2005. Disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4347.pdf>

- I Convención de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, revisada en 1949.

- II Convención de Ginebra para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las fuerzas armadas en el mar, actualizado en 1949.

- III Convención de Ginebra relativa al trato debido a los prisioneros de guerra, actualizado en 1949.

- IV Convención de Ginebra relativa a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra, 12 de agosto de 1949.

- Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo I), 8 de junio de 1977. Disponible en <https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977>

- Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo

II), 8 de junio de 1977. Disponible en <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1388.pdf>

- Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado el 17 de julio de 1998. Disponible en: <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-spa.pdf>

- Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, adoptadas por la Comisión Preparatoria para la Corte Penal Internacional, UN Doc. PCNICC/2000/INF/Add.1, 12 de julio de 2000. Disponibles en: <https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RulesProcedureEvidenceSpa.pdf>

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Disponible en: <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx>

- Reglas de Procedimiento y Prueba del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ITR/3/Rev.1), 29 de junio de 1995. Disponibles en: <http://hrlibrary.umn.edu/africa/RWANDA1.htm>

- Reglas de Procedimiento y Prueba del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (IT/32/Rev.50), 8 de julio de 2015 (última actualización). Disponibles en: https://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Rules_procedure_evidence/IT032Rev50_en.pdf

- Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, 18 de abril de 1961.

- Acuerdo de relación entre la Corte Penal Internacional y las Naciones Unidas, 4 de octubre de 2004 (Doc. ICC-ASP/3/25, Parte III, aprobado por la Resolución ICC-ASP/3/Res.1. Disponible en https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Publications/Compendium/Compendium.3rd.03.SPA.pdf

- Carta de las Naciones Unidas, 26 de junio de 1945. Disponible en: <https://www.un.org/es charter-united-nations/>

- Resolución 3068 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 30 de noviembre de 1973, por la que se aprueba la Convención Internacional sobre la represión

y el castigo del crimen de *apartheid*. Disponible en:
<https://undocs.org/S/A/RES/3068%28XXVIII%29>

- Resolución número 96 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Crimen de Genocidio, de 11 de diciembre de 1946. A/RES/96(I). Disponible en:
[https://undocs.org/fr/A/RES/96\(I\)](https://undocs.org/fr/A/RES/96(I))

- Conferencia Mundial de Derechos Humanos. *Declaración y Programa de Acción de Viena* (Doc. A/CONF.157/23), de 12 de julio de 1993. Disponible en
https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf

- Resolución 827 (1993) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 25 de mayo de 1993. S/RES/827. Contiene el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Disponible en [https://undocs.org/es/S/RES/827%20\(1993\)](https://undocs.org/es/S/RES/827%20(1993))

- Resolución 955 (1994) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 8 de noviembre de 1994. S/RES/955. Contiene el Estatuto del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Disponible en [https://undocs.org/pdf?symbol=es/S/RES/955%20\(1994\)](https://undocs.org/pdf?symbol=es/S/RES/955%20(1994))

- Resolución 1503 (2003) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 28 de agosto de 2003. S/RES/1503. Disponible en [https://undocs.org/es/S/RES/1503%20\(2003\)](https://undocs.org/es/S/RES/1503%20(2003))

- Resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 31 de marzo de 2005. S/RES/1593. Remisión de la situación en Darfur a la CPI. Disponible en <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2005/3803.pdf?view=1>

- Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 26 de febrero de 2011. S/RES/1970. Remisión de la situación en Libia a la CPI. Disponible en [https://www.undocs.org/es/S/RES/1970%20\(2011\)](https://www.undocs.org/es/S/RES/1970%20(2011))

Webgrafía:

- Organización de las Naciones Unidas: <https://www.un.org/es/>

- Centro Internacional para la Justicia Transicional (CIJT): <https://www.ictj.org/es/>

- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: <https://www.ohchr.org/SP/Pages/Home.aspx>

- Federación Internacional por los Derechos Humanos: <https://www.fidh.org/>
- Institut de Drets Humans de Catalunya: <https://www.idhc.org>
- Comité Internacional de la Cruz Roja: <https://www.icrc.org/es>
- Amnistía Internacional: <http://www.es.amnesty.org>
- https://www.hchr.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=1191:materiales-sobre-justicia-transicional&Itemid=269
- <https://www.derechoshumanos.net>
- Corte Penal Internacional: <https://www.icc-cpi.int/Pages/Main.aspx>
- Corte Interamericana de Derechos Humanos: <https://www.corteidh.or.cr>
- Human Rights Watch: <https://www.hrw.org>
- Esquema de los diferentes tribunales internacionales documentados por la ONU: <https://research.un.org/es/docs/law/courts>

Apartado documental:

- *Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos* (S/2004/616), 3 de agosto de 2004. Disponible en <https://undocs.org/es/S/2004/616>
- *Informe del Secretario General a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el alcance y la aplicación del principio de jurisdicción universal* (A/72/112), 22 de junio de 2017. Disponible en <https://undocs.org/pdf?symbol=es/A/72/112>
- *Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos: Estudio sobre el derecho a la verdad* (E/CN.4/2006/91), 9 de enero de 2006. Disponible en <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G06/106/59/PDF/G0610659.pdf?OpenElement>
- *Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff: Misión a España* (A/HRC/27/56/Add.1), Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 22 de julio

2014, [consultado el 14 de marzo de 2020]. Disponible en: http://www.congreso.es/docu/docum/ddocum/dosieres/sleg/legislatura_12/spl_24/pdfs/7.pdf

- *Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto: comisiones de la verdad*, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Nueva York y Ginebra, 2006. Disponible en <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawTruthCommissionssp.pdf>

- *Informe final elaborado y revisado por M. Joinet en aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión de prevención de discriminaciones y protección de las minorías*, presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Distr. General E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1), 2 octubre de 1997. Disponible en <http://www.derechos.org/nizkor/doc/joinete.html>

- *Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad. Informe de Diane Orentlicher*. Doc. ONU E/CN.4/2005/102. 18 de febrero de 2005. Disponible en <http://www.derechoshumanos.net/normativa/normas/onu/lesahumanidad/2005-Principios-actualizados-lucha-contrainpunidad.pdf>

- Informe *Nunca más*, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), Argentina, 1983. Disponible en: <http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/argentina/informe-de-la-CONADEP-Nunca-mas.htm>

- Informe *De la locura a la esperanza*, Comisión de la Verdad para el Salvador, El Salvador, 1993. Disponible en <http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/elsalvador/informe-de-la-locura-a-la-esperanza.htm>

- *Los derechos de las víctimas ante la Corte Penal Internacional: manual para víctimas, sus representantes legales y ONG* [recurso electrónico], Federación Internacional por los Derechos Humanos, 2007 [consultado 1 de mayo de 2020]. Disponible en: <https://www.fidh.org/es/temas/justicia-internacional/corte-penal-internacional-cpi/Los-Derechos-de-las-victimas-ante>

- *La jurisdicción universal: preguntas y respuestas* [recurso electrónico], Amnistía Internacional, Londres, 2001 [consultado 17 de abril de 2020]. Disponible en: <https://www.amnesty.org/download/Documents/128000/ior530202001es.pdf>

- *Comisionar la justicia: las comisiones de la verdad y la justicia penal* [recurso electrónico], Amnistía Internacional, Madrid, 2010 [consultado 18 de marzo de 2020]. Disponible en [https://www.amnesty.org/es/documents/ POL30/004/2010/es/](https://www.amnesty.org/es/documents/POL30/004/2010/es/)

- *Verdad, justicia y reparación. Creación de una comisión de la verdad efectiva* [recurso electrónico], Amnistía Internacional, Londres, 2007 [consultado 2 de abril de 2020]. Disponible en <https://www.amnesty.org/download/Documents/68000/pol300092007es.pdf>

- *Catorce principios fundamentales sobre el ejercicio de la jurisdicción universal* [recurso electrónico], Amnistía Internacional, Londres, 1999 [consultado 24 de abril de 2020]. Disponible en <https://www.amnesty.org/download/Documents/148000/ior530011999es.pdf>

- *Basic Facts on Universal Jurisdiction* [recurso electrónico], Human Rights Watch, 2009 [consultado 30 de abril de 2020]. Disponible en: <https://www.hrw.org/news/2009/10/19/basic-facts-universal-jurisdiction>

- *Make Way for Justice nº 3. Universal Jurisdiction Annual Report* [recurso electrónico], TRIAL International, 2017 [consultado 31 de marzo de 2020]. Disponible en https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2017/03/UJAR-MEP_A4_012.pdf

- *Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de España* (Doc. CCPR/C/ESP/CO/6), Comité de Derechos Humanos de la ONU, 14 de agosto de 2015. Disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fESP%2fCO%2f6&Lang=es

- *Principios de Princeton sobre la Jurisdicción Universal*. Anexo a la Nota verbal de 27 de noviembre de 2001 dirigida al Secretario General por las Misiones Permanentes de Canadá y Países Bajos ante las Naciones Unidas. Doc. ONU A/56/677 (2001), Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 4 de diciembre de 2001. Disponible en: <http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/princeton.html>

- *Principles on Universal Jurisdiction in respect of Gross Human Rights Offences: An African Perspective*. Africa Legal Aid, El Cairo-Arusha, 2001-2002. Disponible en: https://www.africalegalaid.com/download/policy_document/Policy_Document.pdf
- *Informe de la Corte sobre la estrategia en relación con las víctimas*, VIII Sesión de la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional, 10 de noviembre de 2009 (ICC-ASP/8/45). Disponible en: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP8/ICC-ASP-8-45-ENG.pdf
- *Estrategia revisada de la Corte en relación con las víctimas*, XI Sesión de la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional, 5 de noviembre de 2012 (ICC-ASP/11/38). Disponible en: https://asp.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/ASP11/ICC-ASP-11-38-ENG.pdf